

Diciembre 29/30 de 1964

56ª REUNION — Continuación de la 6ª SESION EXTRAORDINARIA

Presidencia del doctor **CARLOS H. PERETTE**, vicepresidente de la Nación

Secretarios: señores **CLAUDIO A. MAFFEI** y **CESAR ALBERTO RODRIGUEZ**

Prosecretario: señor **DELFOR W. CARESSI**

SENADORES PRESENTES:

ABDALA, Demetrio César
ABDALA, Felipe
ACUNA, Ramón Edgardo
AGUIAR VAZQUEZ, Américo Ángel
AGUIRRE LANARI, Juan R.
ASTUDILLO, Félix E.
BARBICH, Adolfo A.
BASSI, Ricardo Alberto
BAUDUCCO, José Raúl
BLANCO, Rubén V. M.
CASTIGLIONE, José F. L.
DE REGE, Roberto
FASSI, Santiago Carlos
FERNANDEZ (h.), Mariano
FREYTES, Ángel R.
GADANO, José Enrique
GAMOND, Eduardo José Agustín
GELSI, Celestino
GHIGLIONE, Alfredo Miguel
GONZALEZ FUNES, Tomás
LÓPEZ, Jorge Oscar
LOVAGLIO, Dante A.
LUBARY, Ginés A.
MARTÍNEZ, José Alberto
MARTÍNEZ GARBINO, Lucio José
MARTÍNEZ SARAIVIA, Miguel A.
MORILLO, Carlos Argentino
OLMEDO, Rolando
RODRÍGUEZ, Eugenio L.
SALMÉN, Miguel
SAPAG, Elías
SNOPEK, Guillermo

TARDELLI, Antonio
VARELA DÍAZ, Diógenes
VITTI, Alfonso Andrés
ZINNY, Mario

AUSENTES, CON LICENCIA:

BERNARDO, Miguel Ángel
CORRADI, Luis Mauricio
RISPOLI ROMÁN, Enrique G.

AUSENTES, CON AVISO:

ACUNA, Ernesto N.
CANTONI, Aldo H. N.
CAPRARO, Francisco
FLORES, Domingo
MANCINI, Galileo
OVANDO, Ricardo
RAMÍREZ, Lauro Francisco

SUMARIO

-
- 1.—Continúa la consideración de los dictámenes en mayoría y minoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales en los proyectos de ley, en revisión, y del señor senador Bassi sobre Estatuto de los Partidos Políticos. Se aprueba el dictamen de la mayoría. (Página 2682.)
 - 2.—Mociones: del señor senador Salmén, para que se pase a cuarto intermedio, y del señor senador Blanco, para que se autorice a la Presidencia a comunicar las sanciones dadas por el cuerpo. Se aprueban. (Página 2715.)

3.—Asunto entrado:

Informe de los señores senadores **Zinny** y **Abdala (D.)** sobre las resoluciones y recomendaciones dadas por el **III Congreso de Seguridad Social** realizado en Bariloche. (Página 2715.)

4.—**Se conceden licencias** para faltar a sesiones a los señores senadores **Rispoli Román** y **Bernardo**. (Página 2716.)

5.—**Plan de labor**. (Página 2717.)

6.—**Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda** en el proyecto de ley en revisión sobre **prórroga de los regímenes de coparticipación federal en impuestos nacionales**. Se aprueba. (Página 2717.)

7.—**Consideración de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda** en los proyectos de ley en revisión sobre **modificaciones al sistema tributario nacional** y sobre **creación de un impuesto a los combustibles líquidos**. (Página 2720.)

8.—Apéndice:

I.—**Insertión** solicitada por el señor senador **Salmén**. (Página 2746.)

II.—**Sanciones del Honorable Senado**. (Página 2748.)

—En Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de diciembre de 1964, a la hora 16 y 30, dice el

Sr. Presidente. — Continúa la sesión.

1

ESTATUTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador **Aguirre Lanari**.

Sr. Aguirre Lanari. — Si bien no se extendió a numerosas sesiones el debate realizado en la Cámara de Diputados, la exhaustiva labor realizada previamente por la Comisión de Asuntos Constitucionales hizo que este dictamen que ahora estamos tratando no resulte el fruto de la improvisación ni tampoco de una sola parcialidad política, ya que el proyecto originario del Poder Ejecutivo sufrió numerosas modificaciones, y este que hoy estamos analizando puede reputarse, a justo título, el producto de una labor conjunta.

Por el trabajo realizado previamente en la Cámara de Diputados y el debate de por sí extenso que se ha efectuado en el día de ayer he de omitir referirme concretamente a todas y cada una de las disposiciones, y me he de centrar más bien en conceptos de carácter general, lo que importa, sobre todo, una toma de posición y una afirmación de principios frente a los que son rectores en la iniciativa en consideración.

Porque tiene importancia para justificar la labor que de por sí significa el abocarse a este tema que hoy nos ocupa he de referirme en primer lugar a la importancia que tiene, en el derecho público de hoy y en la vida institucional del país, todo lo que se relaciona con el desenvolvimiento de los partidos políticos, que ha hecho decir a Duverger, en su clásico libro sobre la materia, que en el día de hoy el asunto relativo al de los partidos políticos dentro del derecho constitucional tiene tanta o más importancia que la distribución misma de la parte que corresponde a los poderes que integran el gobierno. Y en este sentido cita como ejemplos a la Turquía kemalista, a la Alemania nazi y a la Rusia staliniana, países con distintos regímenes de gobierno pero que coinciden, sin embargo, en la práctica totalitaria del partido único. Por ello anota bien Bluntschi que la ausencia de partidos es signo de incapacidad y de opresión. Matienzo, por su parte, ha podido afirmar que las instituciones no pueden marchar sin estos organismos. Kelsen, autor permanentemente citado, encuentra a su vez que los partidos son elementos de la democracia real y concurren a formar la voluntad del Estado.

Pero esta importancia, que hoy en día uniforme y coincidentemente se le asigna a los partidos como instrumentos de gobierno —según la acertada definición de Linares Quintana—, no es una evolución a la que se haya llegado de por sí, sino que significa fijar los sucesivos hitos que a manera de etapas se vienen produciendo en la evolución de las relaciones entre la autoridad y estos organismos, para centrar entonces nuestro análisis con objetividad y precisión y para justificar con ello muchas de las disposiciones que informan al proyecto que consideramos.

Xifra Herzs, autor español, recordando a Triepel, dice que los partidos aparecen a la vez con un carácter jurídico y sociológico: lo primero, en cuanto resulta necesaria la autorización del Estado para su reconocimiento como personas del derecho público; lo segundo, por cuanto en la realidad política de nuestros días los partidos aparecen como formaciones sociológicas fuertemente teñidas por la condición social de sus adherentes. Y el autor aludido encuentra que se producen distintas fases históricas en esta evolución de los partidos, en su relación con respecto a los gobernantes.

La primera es la de la lucha, esto es que se considera a los partidos como facciones despreciables que atentan contra el orden público; porque en ese entonces, en esta primera etapa de la antigüedad, se considera que la «res pública» es el bien común que no admite divisiones o fragmentaciones tal cual resulta de la división partidaria. Se entiende que debe haber una unidad del Estado, y ella, por cierto, es antagónica y no condice con la división o la lucha de los organismos políticos. Y así notamos

que en esta etapa coinciden en su repulsa a los partidos políticos, considerándolos facciones despreciables, como dije antes, tanto los teóricos máximos del absolutismo como, incluso, aunque parezca un contrasentido, los precursores del liberalismo y de la democracia.

Hobbes, que, como sabemos, está en la primera de estas fases, entiende que la división de los partidos trae sediciones, el odio y la violencia, y anticipa una vuelta al estado de la naturaleza.

Spinoza, por su parte, dice que las cosas que conducen a la discordia en la ciudad son reprobables. Y Locke, nada menos que el teórico del parlamentarismo, también se encuentra dentro de esta corriente, que no acepta la pluralidad de opiniones o intereses, que justamente significa la razón de ser de los partidos políticos.

Y hasta el mismo Rousseau, el famoso expositor de la teoría de la voluntad general, entendiendo que ésta no admite intermediarios entre el gobierno y los individuos.

Un reflejo de esta opinión, que veía con prevenciones la actuación de los partidos políticos, es la famosa frase de Washington, en su conocido *Farewell address*, cuando advertía sobre el peligro que entraña la división de los partidos y las desastrosas consecuencias a que llevaban las pasiones humanas que informan la acción de aquéllos. Dentro de esta tónica, los autores de *El Federalista* recomendaban la unión contra la lucha de facciones que amenazaban la integridad del naciente Estado.

Se ha recordado —esto lo cita Linares Quintana y ha sido mencionado en el propio debate de la Cámara de Diputados y ayer también en los antecedentes expuestos por el miembro informante de la mayoría— que en nuestro país tuvimos algunas repercusiones de esta manera inicial de pensar con la crítica del general Urquiza, que decía que cada facción ha traído su desgracia y cada partido su catástrofe.

Puede citarse incluso el caso de un gobernador de provincia quien llegó a publicar un pintoresco decreto prohibiendo la existencia de partidos políticos.

Pero dentro de esta etapa que iniciamos habría de ser Montesquieu, el famoso autor de *El espíritu de las leyes*, quien justificaría plenamente la razón de ser de los partidos políticos, considerándolos como elementos necesarios en cuanto contribuyen al bien de la comunidad, como las disonancias de la música concurren a formar el acorde total.

Y un inglés, Burke, habría de considerarlos como ingredientes y aceptar la conveniencia y la eficacia de la existencia de un gobierno de la oposición. Como sería un inglés también, Lord Bryce, el famoso autor del libro sobre constituciones rígidas y flexibles, quien por primera vez habría de exponer, al estudiar las instituciones norteamericanas, la función trascendente de los partidos políticos.

Luego de esta etapa inicial, o sea la de la lucha directa y la supresión y prevención del Estado con respecto a la actuación de los partidos políticos, entramos en la segunda, la cual ya no se caracteriza como una lucha u oposición sino como una ignorancia del Estado. Es la posición liberal que ha sido calificada como agnóstica. El Estado no persigue a los partidos políticos. El Estado y el legislador simplemente los ignoran como máxima, sin atribuirles otro carácter que el de sujetos sometidos a la ley pertinente en materia de asociaciones. Típico ejemplo de esto es la famosa Constitución de Weimar. Autores enrolados dentro de esta corriente, como Triepel y Jellinek, consideran a los partidos como fenómenos de carácter extraconstitucional. Pero habríamos de llegar, en este devenir de la puesta de posición del Estado frente a estos organismos intermedios entre él mismo y los individuos, a la tercera etapa, que es la que nos interesa centrar: la etapa llamada de la legalización, donde los partidos políticos encuentran su existencia consagrada en constituciones y en leyes.

Así, el Estado no lucha contra ellos ni siquiera los ignora. Los considera elementos o ingredientes necesarios dentro de la vida institucional, y considera por ello oportuno y conveniente reglamentarlos a objeto de que los mismos cumplan adecuadamente la función de bien público que debe signar su trayectoria.

Este hecho coincide, como se ha anotado por allí, con el llamado fenómeno de la constitucionalización y de la racionalización del poder, al decir de Mirekine Guetzevich, esto es, el intento de someter al derecho la vida toda del Estado. Expresión de esta nueva postura son las modernas Constituciones, como la de Cuba de 1940, la de Checoslovaquia de 1918, que prevé un tribunal electoral, y la Constitución italiana, entre las más recientes, que reconoce el derecho de asociarse libremente, aunque impone restricciones, como resulta, por ejemplo, con la existencia del partido fascista que, en defensa de la democracia, es prohibido. Y también, según habré de recordar inmediatamente, la ley fundamental de Bonn, que está dentro de la democracia occidental y que contiene prescripciones totalmente categóricas en salvaguarda de la autenticidad del ejercicio de prácticas democráticas.

Hay una cuarta etapa dentro de esta evolución que ya no es ni de lucha ni de ignorancia ni de legalización; es una etapa más avanzada pero que excede los marcos del constitucionalismo y de la democracia. Es aquella en la cual ya el partido político se incorpora al Estado. Pero antes de llegar a ello quiero ratificar nuevamente con respecto a esta posición que estaba examinando que la legalización que se hace de los partidos políticos adopta dos formas: una forma externa, en cuanto significa una institucionalización del partido político, el cual viene a ser un órgano reconocido y am-

parado expresamente por el Estado en tanto y en cuanto este partido se adecue a las directivas fundamentales que legal o constitucionalmente se le imponen; y además es objeto de un control de tipo ideológico programático, que se realiza con respecto a la actividad de ese partido, que obliga a su lealtad en cuanto a la filiación democrática de la Constitución que lo rige. Ejemplo de ello, como dije hace un momento, es el artículo 12 de la ley fundamental de Bonn que me voy a permitir leer, el cual prohíbe aquellos partidos que ataquen o destruyan el libre ordenamiento democrático o amenacen la existencia del Estado.

Dentro de esta tesitura son numerosas las legislaciones que se pronuncian contra los partidos comunistas y subversivos, como ocurre con algunos cantones suizos; contra los partidos fascistas, como sucede en Alemania e Italia; o contra los partidos internacionales, como prescribe la Constitución peruana de 1933.

Algo de esto, y por eso es importante mencionarlo, trae nuestro proyecto. Y entiendo que con ello no adopta una posición singular, sino que está perfectamente encuadrado dentro de estos carriles de legislación contemporánea que he citado.

En resumen, dentro de esta etapa de la evolución de los partidos políticos se admite una acción del Estado que es a la vez preventiva y represiva y que asegura la fidelidad del partido con el régimen democrático liberal y la actividad funcional de su vida interna en cuanto a la agrupación. Democracia externa e interna a la vez, con lo cual queda bien demostrado que los recaudos del proyecto que votamos no son una creación antojadiza, sino que están respaldados por una vasta experiencia contemporánea.

Por último, como dije hace un momento, dentro de esta evolución interesa solamente, para destacar que es una etapa de tipo patológico, citar la llamada incorporación del partido; ya no la de la lucha, la ignorancia, la legalización o la constitucionalización; es la incorporación del partido al Estado. Aquí ya estamos, no dentro de la democracia pluripartidista, sino dentro del régimen del partido único inspirado por las ideologías totalitarias. Aquí ya no es un Estado de partidos sino que el Estado es el partido mismo. Los dictadores han empleado siempre la misma técnica. Critican a los políticos, a los partidos ajenos, para imponer, de esa manera, la primacía del partido propio. Los demás son vendepatrias y traidores, y así crean una doctrina nacional que es la de su partido y que se confunde en esta etapa con la del partido único.

Dejo de lado este aspecto, porque, como dije, es anormal, patológico y está fuera del marco de la democracia que todos buscamos consolidar y afirmar.

Quiero sí, dentro de este orden, hacer una defensa de los partidos políticos, que demuestre que no son una creación antojadiza sino que

cumplen una efectiva y eficaz función en la consolidación de la vida democrática, en el aseguramiento de las libertades. He de recordar a este respecto la opinión de Trevelyan, que explica, en un breve y sustancioso estudio, editado por el Fondo de Cultura Económica, cómo desempeña un papel decisivo lo referente a las luchas de *tories* y *whigs* en la preparación y triunfo de la gran revolución liberal inglesa de 1688. A su vez, estudiando la repercusión que los mismos han tenido en los Estados Unidos de América, Schattschneider dice que en su patria los partidos llegaron a crear la democracia, le quitaron el timbre de tipo aristocrático que tenía inicialmente la Constitución, para adaptarla a las necesidades de la época y para convertir ese pequeño Estado inicial en el más rico y próspero de la tierra.

Los partidos políticos desempeñan funciones trascendentes, que han sido descritas a lo largo de toda la doctrina, y de la cual he de limitarme a extraer algunas de las más importantes, recordadas por el profesor Linares Quintana, quien dice que actúan formulando la política nacional, constituyéndose así en verdaderos y auténticos instrumentos de gobierno, como he citado hace un momento. Son los órganos necesarios para la designación de candidatos y, por ende, para asegurar una convivencia armónica en el juego regular de las instituciones. Ejercen una función de conducción o de crítica según que estén en el gobierno o en la oposición, respectivamente. Ambas son funciones igualmente importantes, al extremo que puede recordarse que alguna vez se ha calificado a la oposición de su majestad, en Inglaterra, como una de las conquistas más preciosas que se han podido asegurar por la dignidad que se le concede a esa misión dentro de ese país, tan adentrado en el parlamentarismo.

Actúan también los partidos con una función efectiva en lo que hace a la educación política del pueblo que encuentra a través de su doctrina, de su tribuna y de las exposiciones de sus representantes parlamentarios la elucidación de los problemas desde los distintos puntos de vista y enfoques en el ámbito partidario. Y actúa, en suma, para mantener no sólo la unidad del gobierno, sino para consustanciarse en la práctica de los principios esenciales de la democracia y del constitucionalismo, para afirmar definitivamente la unidad nacional de aquellos países que están dentro de la evolución que nosotros queremos que rija siempre en el nuestro.

En nuestra Constitución no existe, por cierto, una mención específica en lo que hace a los partidos políticos; y con ello nuestra Carta Magna no hace sino seguir el modelo estado-unidense que efectivamente estaba inspirado, en la época en que se dictó, por la postura que recordé anteriormente, de ignorancia, pero ya

no de lucha en lo que hace a estas organizaciones. Pero en Estados Unidos, sin embargo, la jurisprudencia, como ocurre con la Corte de Wisconsin, ha decretado ya de antiguo la licitud de la existencia de los partidos políticos dentro de las Constituciones estatales, como ocurre también en nuestro país, donde ya las Constituciones provinciales, como las de Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja e incluso la de mi provincia, con la reforma que realizamos en 1960, han institucionalizado la existencia, el valor y la gravitación de los partidos dentro del juego de la democracia. Pero esto no significa, señor presidente, que el partido político esté excluido de la Constitución Nacional ni que ésta inhiba nuestra potestad legislativa para legislar sobre ellos y reglamentar adecuadamente su función.

La existencia de los partidos políticos está contemplada en el artículo 14 que reglamenta el derecho de asociación, en el artículo 22 que expresa que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, y además está ligada a otros derechos de carácter constitucional, como la libertad de petición, la libertad de prensa, que forman la opinión pública, elemento fundamental para el juego armónico de las instituciones.

Estas disposiciones, pues, consagran varios supuestos que debemos dejar expresamente sentados. Por un lado, la legalidad o constitucionalidad de los partidos políticos dentro de nuestro régimen; por el otro, la indudable potestad legislativa para reglamentarlos dentro de un poder de policía del Estado, que tiene carácter indelegable, y que permite la reglamentación de estos derechos tal cual ocurre con otros que la Constitución expresamente menciona. Y por último la conveniencia de fortificar la acción de los partidos políticos como verdaderos instrumentos de la democracia que necesitan acrecentar su influencia y su papel protagónico para defenderse de una creciente competencia de los llamados «grupos de presión», como les dicen los anglosajones, o «grupos de intereses», como se los llama dentro de la doctrina europea, o «grupos de tensión», según la original expresión de un autor argentino, Carlos S. Fayt.

Algo de esto preocupó mi atención, señor presidente, y hace ya varios años. En un artículo publicado en el diario «La Nación» pude decir: «Necesario es, entonces, si queremos verdaderamente que el Estado democrático de derecho sea realidad y no ficción desprestigiada, remover objeciones como ésta.» Me estaba refiriendo a la falta de representatividad de los partidos políticos, con un sistema electoral que impedía canalizar auténticamente las expresiones. Y continuaba: «Hay que tonificar la democracia para que puedan constituirse en intérpretes autorizados y efectivos del sentir de los mandantes, evitando esta competencia creciente de los grupos de presión, que parecen anticipar

un nuevo corporativismo medieval, o una valeda justificación de modernos totalitarismos clasistas.»

Yo creo, señor presidente, que todo lo que signifique tonificar, dentro de la esfera que le corresponde, a los partidos políticos en su papel ineludible dentro de la democracia sería hacer que los mismos puedan constituirse en verdaderos y auténticos intérpretes del sentir de las distintas corrientes políticas que encuadran nuestro quehacer nacional, evitando una desvirtuación que trae escepticismo, con todas las nocivas consecuencias que fortifican la prevención y prédica malevolente de aquellos que sueñan con gobiernos de hecho, con dictaduras que están por cierto alejadas del auténtico juego de la vida democrática.

Hay que fortificar entonces a la vez a los partidos políticos con una adecuada reglamentación, permitiendo realizar las difíciles, complejas y por cierto sacrificadas funciones que todos nosotros conocemos, porque participamos desde lejos y sabemos lo difícil que es, en este país, donde tanto y tan mal se habla de los políticos, ser consecuentes con la doctrina que nos anima y con la función que nos corresponde.

Hay que fortificar a estos partidos políticos para que puedan cumplir, dentro de nuestra tradición y dentro de las funciones que les asigna la Constitución Nacional, la misión trascendente a que están llamados.

Debemos evitar, señor presidente, que dentro de la esfera política y con carácter político se incluyan estos otros grupos de presión realizando huelgas con ese sentido y, por lo tanto, alejados de intereses gremiales.

Y no solamente debemos tonificar a los partidos políticos, como se pretende con este instrumento, sino que también debemos evitar que se empleen fondos de otros organismos de presión, que están aportados por todos sus integrantes con fines de carácter político partidista, para justificar propagandas de este carácter, o viajes que nada sirven sino para introducir consignas foráneas impregnadas de odio y de violencia.

La República quiere paz y debe conseguirla a través del juego armónico de sus partidos políticos. Se habla de pacificación y se la reclama como imperativo, pero esto no puede ser un acto unilateral sino conducta lealmente servida con el sacrificio de humanas pasiones y de escondidos intereses.

No es del caso hacer un análisis exhaustivo de las distintas disposiciones del proyecto que examinamos a esta altura del debate, puesto que resulta inoficioso después de lo mucho que se ha dicho en la Cámara de Diputados sobre el mismo. Lo que interesa, sí, es sentar posición con respecto a algunos de los temas candentes que fijan o destacan la filiación del régimen que se crea, a los efectos de la consiguiente interpretación.

Es evidente, a tenor de los artículos 19, 20, 22 y 23, que se consagra una amplia libertad para la actuación de los partidos políticos democráticos, y que la amplia libertad que se brinda a la ciudadanía está lógicamente condicionada al requisito de que éstos estén verdaderamente interesados en ese ejercicio leal de la democracia y no pretendan socavar la paz de nuestro sistema institucional y de nuestro estilo de vida. Se exige así que la filiación democrática sea no solamente en cuanto al programa o doctrina que anima al partido sino que se impone también una institucionalización de sentido democrático en lo que hace a su vida interna, en virtud de los recaudos que se establecen para evitar digitaciones de arriba hacia abajo, propias de sistemas dictatoriales y de personalismos que nada tienen que hacer con la democracia que se pretende asegurar y preservar.

Yo coincido con estos recaudos; incluso pienso que podrían acentuarse aún más las exigencias, de acuerdo con lo sugerido en la Cámara de Diputados por los doctores Belgrano Rawson y Jofré, cuando proponían agregar como requisito la no subordinación con respecto a Estados o partidos internacionales o hasta con partidos o personas extranjeras o domiciliadas en el extranjero.

Yo sé, señor presidente, porque lo anticipa así el dictamen de la mayoría, que el estatuto que viene en revisión no ha de sufrir modificaciones, pero me parece que es el momento de hablar claro y de que cada uno deje a salvo sus opiniones. Debo aclarar también, porque no quiero que se incurra en transgresiones ni en malas interpretaciones, que yo no pretendo ni puedo de ninguna manera combatir la libertad de pensamiento. Mis votos en este Senado así lo han acreditado permanentemente, lo mismo que mi conducta. Pero otra cosa es permitir conscientemente que al amparo de la libertad permitamos que se organicen quienes están dispuestos a fusilarla por la espalda. Demasiadas experiencias nos ha brindado el mundo en que vivimos sobre la candorosa inocencia de quienes no supieron preservar la democracia de sus enemigos. La técnica y la psicología de la dictadura han tenido rasgos parecidos a través del tiempo y de las fronteras.

Desde la época clásica de los famosos estudios de Cicerón sobre «El dictador», los métodos perviven. Se halagan las bajas pasiones, se destruye la reputación de quienes actúan en política, se exigen medidas so color de amparar intereses populares en detrimento del interés de la república, se azuzan los nobles impulsos de amor a la patria bajo formas morbosas de odio al extranjero; se crean conflictos artificiales en contraposición a la fraternidad universal y a la paz entre los pueblos, y finalmente, conseguido el poder por la vía democrática, se olvidan los derechos individuales, se proclama una doctrina nacional identificada con el partido go-

bernante que destruye la actividad del adversario, y se sume, en fin, al país, en despotismos personales y mesiánicos, signados por el odio, la persecución ideológica y la violencia personal.

Esta es la triste experiencia del mundo en que vivimos, la que no queremos que azote los días por venir, la que deseamos preservar para que no la sufran en carne propia nuestros hijos. Por eso no debemos temer o recoger la experiencia de países con civilizaciones milenarias como ocurre con Alemania e Italia, que han sabido no olvidar la desgracia en que vivieron.

Otra observación más deseo formular con respecto al artículo 3º del proyecto. En la redacción originaria dada por la Honorable Cámara de Diputados, se había proyectado que debía formar parte de la doctrina de los partidos políticos, el sostenimiento del régimen federal. Este requisito fue suprimido e incluso se aclaró, ante observaciones formuladas por el diputado Muñiz, que resultaba ilícito incorporar como principio partidario la posibilidad de la reforma del sistema federal vigente.

Yo disiento con esta teoría, señor presidente. Creo que hubiera sido oportuno mantener la redacción originaria. Esta no es una discusión estéril y lamentablemente puede tener trascendencia práctica en el futuro. Reconozco que la opinión contraria no es improvisada y que participan de ella destacados valores científicos de nuestro país. En el campo de la doctrina nacional se han suscitado divergencias, incluso para medir la amplitud con que podría operar el poder constituyente nacional. Roza este asunto la propia discusión sobre el poder constituyente, que queda resignada o reservada a las provincias, y en este sentido cabe recordar, de paso, la opinión enjundiosa del doctor Sánchez Viamonte, en su obra *Sobre el poder constituyente*, quien sostiene que la nación, o mejor dicho, el poder constituyente nacional, comienza su derrotero en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, y que luego ese poder constituyente queda diluido, pues las provincias, dentro del período de desorganización nacional, adquieren poder constituyente originario o genuino. Pero que luego de moldeada la unidad nacional después de la Constitución de 1853, ese poder constituyente que habría quedado en manos de las provincias, quedó subsumido dentro del orden jurídico total que es el poder constitucional de la Nación, sostiene Sánchez Viamonte.

Pero este mismo autor que cito, que certifica una posición absoluta en cuanto a la premisa terminante y sin cortapisas del poder constituyente nacional, atenúa más tarde su doctrina en un breve estudio que hace sobre las facultades que quedan reservadas a la provincia de Buenos Aires luego del pacto del 11 de noviembre de 1859, al que califica —y por cierto que con exactitud— como un pacto casi internacional, siguiendo las palabras de Alberdi, para concluir que la provincia de Buenos Aires mantiene re-

servadas facultades integérrimas que hacen que dentro de la propia Constitución no puedan ser superadas por una posterior reforma, y mucho menos por los poderes constituidos que actualmente lo detentan.

Con el respeto que me merece la opinión del doctor Sánchez Viamonte, con cuya amistad personal me honro y que ha sido mi maestro, yo disiento con que pueda admitirse solamente para la provincia de Buenos Aires una situación singular en virtud de este pacto especial a que he aludido, y que se niegue en cambio que para las otras provincias pueda existir lo que también podría calificarse como cláusulas políticas inderogables o indelegadas, que tales son, sin duda, las facultades que ellas expresamente se reservan dentro de la letra de la Constitución Nacional y de los pactos preexistentes, que constituyen los cimientos sobre los cuales esta Constitución Nacional se edifica posteriormente.

No es incurrir en exclamaciones, sino expresar una dolorosa verdad histórica, la afirmación de que a la Constitución de 1853, al Congreso de Santa Fe y previamente a la Sala de Acuerdos de San Nicolás, las provincias concurren y coinciden bajo la condición terminante, clara y taxativa de constituir la Nación bajo el régimen representativo, republicano y federal, y esto no es una creación del Acuerdo de San Nicolás ni del Congreso de Santa Fe, esto no es sino cumplir un antecedente que en el propio Acuerdo de San Nicolás se cita, que es el pacto federativo del 4 de enero de 1821.

Las provincias, entonces, llegan a la Convención Constituyente de Santa Fe y declinan en acto de poder constituyente originario o genuino sus facultades, pero reservándose aquellas que no delegan, y entre las que históricamente no delegan y no pueden delegar, porque existía un mandato expreso de sus representantes, está la estructuración del país bajo la forma federal.

Esta forma federal no era una creación artificiosa, sino el producto de una vasta experiencia de desencuentros y de desinteligencias amasadas con sangre, con persecuciones, con lucha, dolor y sacrificio.

Por eso participo, señor presidente, de la opinión de Linares Quintana, que distingue dentro de toda Constitución, siguiendo a un tratadista norteamericano, William Hard, lo que se llama el cuerpo y el espíritu de nuestra Constitución. Y yo afirmo que dentro del espíritu de nuestra Constitución, dentro del sentimiento que guió a nuestros constituyentes, dentro del mandato que ellos llevaron, sin que pudieran transgredirlo porque era claro, expreso e intergiversable, estaba el estructurar nuestro país bajo la forma representativa, republicana y federal.

No era una creación artificial o caprichosa de los mismos, era el voto expreso de los pueblos, del cual ellos eran meros intérpretes y mandatarios, y bajo esa condición inexcusable, bajo

esa condición ineludible e indelegable para aquellos que están encuadrados dentro de la Constitución Nacional, se edificó el país bajo esta forma federal. De manera que la forma federal no es una cláusula cualquiera; es una de esas que en doctrina se llaman cláusulas pétreas o inderogables, porque están por encima de toda posible reforma. Son lo que algún autor ha calificado como directivas políticas fundamentales, en virtud de las cuales si una de esas condiciones —y estoy citando a Schmitt aunque no comparta sus teorías— es violada, se produce no ya la reforma de la Constitución, sino lo que él califica como destrucción de la Constitución. Y afirmo, señor presidente, dentro de esa voluntad constituyente, originaria y condicionante de la fundación de nuestra República bajo la forma de la Constitución de 1853, que ésta fue edificada bajo la forma federal, y la calificación de federal es cláusula política inderogable, por lo cual no sería lícito que los partidos, si están dentro de la Constitución Nacional, pudieran pretender, en base a una voluntad constituyente originada en un proceso deformante por la concentración demográfica de nuestro país, romper el mandato de los padres de la Constitución y de los fundadores de la República.

Como hombre de provincia y como hijo de Corrientes que guarda la tradición de sus luchas por el federalismo, yo confieso con fervor y con orgullo que deberíamos solicitar, si no se acepta cuando menos la inclusión expresa de la palabra federal, que quede como interpretación auténtica de esta Cámara que está dentro del espíritu de nuestra Constitución el resguardar este acervo histórico que no nos pertenece a nosotros exclusivamente, ya que es una herencia que nos legaron aquellos que nos dieron el país.

Así, señor presidente, nosotros cumpliremos con la voluntad de esta Constitución que, como bien la definiera Bartolomé Mitre, satisface nuestras legítimas esperanzas hacia la libertad y el bien; ella es la expresión de la soberana voluntad porque es la obra de los representantes libremente elegidos; ella es el resultado de las fatigas, los desvelos y las meditaciones de nuestros altos pensadores; ella es —glosando sus palabras— la palabra viva de nuestros profetas y la de los mártires políticos.

Yo no quiero distraer más la atención de la Honorable Cámara porque estimo que resulta inoficioso, a esta altura del debate, analizar otros aspectos parciales, sin perjuicio de lo que podamos decir en el curso de la discusión en particular. Por lo expuesto, con las salvedades hechas y con las afirmaciones en cuanto a las directivas políticas fundamentales del estatuto que vamos a considerar, damos nuestro voto favorable al dictamen en general, reservándonos para la discusión en particular proponer las modificaciones que estimemos pertinentes. (Aplausos.)

Sr. Presidente.—Tiene la palabra el señor senador De Rege.

Sr. De Rege.—Que la sociedad es una necesidad natural derivada de la naturaleza social del hombre, es una concepción que ya era sostenida en el siglo IV antes de Jesucristo por Aristóteles. El notable filósofo de Estagira definía al hombre como un animal político y doméstico por naturaleza y consideraba que no podía vivir aislado. Sólo un bruto o un dios—decía—, es decir, algo menos o algo más que un hombre, puede existir fuera de la convivencia social. Y ese carácter naturalmente necesario de la sociedad aparece corroborado por el hecho histórico, ya que aun en las épocas más remotas de la historia se encuentran agrupaciones humanas, lo más rudimentarias e imperfectas que se quiera, pero agrupaciones al fin, y nunca jamás individuos aislados.

Ahora bien; es suficiente dirigir la observación al medio social en que el individuo actúa para comprobar que cada persona integra un número infinito de sociedades a las que está ligada por los más diversos vínculos y conexiones. Trátase de agrupaciones de individuos que actúan conjuntamente de acuerdo a normas determinadas y en la prosecución de una finalidad común. Surgen de esta manera las asociaciones profesionales, confesionales, culturales, deportivas, comerciales y —lo que nos interesa particularmente ahora— las asociaciones políticas o partidos.

Bien se ha dicho que «es inevitable en un régimen de libertad el agrupamiento de los individuos por las afinidades de todo orden que obran sobre el ser humano: simpatías, tendencias, maneras de encarar la vida y sus problemas, intereses, etcétera. En esta tendencia del hombre a asociarse para ciertos fines, altruistas o egoístas, está el germen de la formación de los partidos políticos». Croce destaca que «las uniones entre los individuos que sienten que sus necesidades y tendencias son más o menos semejantes, dan origen en la esfera político-económica a las llamadas asociaciones, corporaciones o sindicatos, y en la esfera ético-política a los llamados partidos políticos, a menudo erróneamente apareados o confundidos con los económicos».

Probable es por todo ello que los partidos, en el más amplio sentido del término, ya existieran en la sociedad primitiva. Resulta cierto, al decir de Mackenzie, «que los pueblos primitivos, en una etapa primaria de su desarrollo político, muestran evidencias de diferencias de opinión y la resultante formación de facciones». Y Summer Maine, uno de los más destacados estudiosos de la sociedad primitiva, estima que «el partido probablemente es nada más que una supervivencia y una consecuencia de la primitiva combatividad de la humanidad. Es la guerra fuera de la ciudad trasmutada en guerra dentro de la ciudad. La mejor justificación histórica que puede ofrecerse es que hizo posible

y frecuente que porciones de la nación que de otro modo hubieran sido enemigos armados fueran solamente facciones».

Claro está que en las comunidades primitivas, fundadas en la fuerza y en innumerables y rígidos tabúes, no pudieron existir verdaderos partidos políticos, los que suponen un clima de libertad y respeto, y fueron solamente facciones las que canalizaron ese instinto humano de lucha y acción.

Hay que avanzar mucho en la historia de los pueblos para encontrar el medio institucional propicio para la vida de las agrupaciones partidarias.

¿Cuál es el ámbito en que operan los partidos políticos? Trátase de un sector de la vida social: el campo de la ciencia política, la cual no considera al hombre aislado sino como integrante de grupos. El objeto de la política es la organización del Estado como superestructura social y su fundamento psicológico es la existencia en el ser humano de un complejo espiritual llamado abstractamente el *homo politicus*, caracterizado por los actos de poder. «Si el objetivo de lo político es la organización estatal como expresión de la forma social de poder, observa Poviña, el sujeto colectivo de la misma está predeterminado por esas vivencias potestativas. El partido, que es el verdadero agente político como expresión del grupo, encuentra así su último fundamento psicológico, en esa pura relación de poder, en el concepto abstracto de dominación.

»La superordinación y la subordinación como manifestaciones sociológicas del *homo politicus* justifican la existencia subjetiva del partido político.»

La existencia de los partidos políticos explícate, señor presidente, no como anomalías o enfermedades de los pueblos, sino precisamente por la natural diversidad de ideas, sentimientos e intereses que dividen a los hombres en toda sociedad culta y civilizada, y tal hecho es causa de que en los momentos críticos de las naciones, cuando está en peligro la existencia misma del Estado, se sacrifiquen todas las divergencias en aras del bien y seguridad de la patria. Es lo que hemos podido observar durante la terrible guerra mundial, en que en los países de régimen parlamentario acordóse una verdadera tregua política y se constituyeron gabinetes de coalición, como en Gran Bretaña, Canadá y Australia.

Es que hablar de partidos políticos importa referirse simultáneamente a lucha partidaria, ya que la primera característica sociológica de los partidos políticos resulta de su ubicación dentro del cuadro de los procesos sociales, del que forman parte como un medio o manifestación de conflicto y rivalidad, cuyo contenido es de naturaleza política.

El partido existe para la lucha, siendo su fin último la organización de la voluntad estatal por decisión de la voluntad popular. Es el órgano

de la lucha en el campo político, que desempeña una función semejante a la competencia en la esfera económica o el litigio en la vida jurídica. Su acción constituye una vida social. Es la forma política del conflicto de los grupos, o, usando el lenguaje de Tarde, la oposición política de los poderes interiores.

La base sociológica del partido es el instituto de la lucha y la tendencia a la dominación; tiene un origen natural ya que nace de la sociedad y no se realiza por la obra de algunos individuos. Existe cuando se plantean espontáneamente cuestiones que admiten soluciones diferentes y hay posibilidad de discusión. Vale decir, que los partidos políticos, para existir, requieren la manifestación espontánea de la opinión pública formada en un régimen de libertad civil y política, porque su existencia está en relación con el grado de libertad de que goce la acción libre y espontánea de los ciudadanos.

Michels, que enfocara con brillo el estudio sociológico del partido político, anota que «el partido político etimológica y lógicamente no es sino una parte del complejo de los ciudadanos organizada en el terreno de la política»; y agrega que «el partido es, pues, una fracción: *pars pro toto*». Estima que no es posible la concepción de la democracia sin organización. Ya se trate de reivindicaciones económicas o políticas, la organización aparece como el único medio de crear una voluntad colectiva. Y mientras que ella reposa sobre el principio del mínimo esfuerzo, es decir, de la economía de fuerzas, la organización se convierte, en manos de los débiles, en un arma de lucha contra los fuertes. Una lucha no puede tener posibilidades de éxito sino en la medida en que se desenvuelve sobre el plano de solidaridad entre individuos que tengan idénticos intereses. El principio de la organización debe ser considerado como la condición absoluta de la lucha política conducida por las masas.

De la misma naturaleza del partido político se desprende la importancia que él inviste en el gobierno democrático.

En una democracia la opinión pública juega un papel dinámico y fundamental. Sienta criterio y política, y ejerce una presión constante sobre los representantes. Pero la dificultad surge si se tiene en cuenta que esa opinión pública está integrada por millones de individuos.

En tal caso, ¿resultaría suficiente efectuar una elección para que fuera posible determinar esa opinión pública? Si esos millones de electores concurrieran desordenadamente y sin ningún acuerdo previo a los comicios, evidentemente sus votos se dispersarían en infinidad de candidatos, con lo que el resultado sería caótico.

Surge entonces la necesidad de que con anterioridad a la elección tenga lugar un proceso que agrupe a los electores según sus ideas y sentimientos. Son por tanto los partidos políticos los que imponen el orden y eliminan el

caos del proceso electoral, haciendo practicable el sistema democrático representativo.

La acción de los partidos recuerda la fuerza arrolladora y terrible del torrente que, ciego, desciende de la montaña, llevando todo por delante e imponiendo, en estéril derroche, el caos y la destrucción, pero que, ordenada por diques y canales, transfiere en poder vivificante y fecundo para el hombre.

Resulta pues evidente que los partidos políticos son elementos esenciales e imprescindibles para el funcionamiento del gobierno constitucional hasta el punto de que hay acuerdo de opiniones en considerarlos como verdaderos instrumentos de gobierno. Mas, para que dichas agrupaciones puedan cumplir su real función de intermediarios entre pueblo y gobierno, es menester su organización permanente, ya que lo contrario significaría la indisciplina, la corrupción, el fraude y el predominio de los intereses personales.

Surge pues la necesidad de que la fundación, la constitución, la organización, el funcionamiento y hasta la extinción de los partidos políticos se encuadren en principios de una verdadera y sana democracia; se encuadren en principios que eviten esos males, pero que además no interfieran en la vida interna de los partidos o la subordenen a presiones extrapartidarias.

Tratamos hoy, señor presidente, el despacho referente a esta cuestión que interesa a la existencia misma de la democracia representativa.

Como demócratas cristianos creemos que la forma natural de realización del hombre es a través del régimen pluralista que permite el ejercicio de ideas contrapuestas. Sólo así el hombre puede ejercitar el libre albedrío, condición indispensable para la proyección hacia fines superiores.

Desde el punto económico-social creemos imprescindible lograr para los integrantes de la comunidad el mayor grado de participación política. Un elemental sentido de justicia nos mueve a sostener esto pero también en la Argentina de 1964; la participación política de la totalidad de los integrantes de la comunidad es indispensable por razones de orden práctico.

El ingreso total nacional puede ser estimado en dos billones de pesos y la población activa en 9.500.000 personas. Si repartimos en forma total e igualitaria el ingreso entre todos los argentinos, nos encontramos con que percibirían un ingreso de 14.600 pesos mensuales. Esto da la pauta de que la situación argentina, la crisis profunda por la que atraviesa nuestra Nación, no puede ser solucionada sino en virtud de un gran esfuerzo conjunto.

Es imprescindible que todos los argentinos trabajemos por la superación de nuestros problemas, como integrantes de una misma comunidad, orgánica y eficientemente.

La Argentina no se salva por la acción exclusiva ni de los buenos ni de los malos. Aunque re-

sulte paradójico aquí tienen que trabajar tanto los buenos como los malos, en forma espontánea y decidida. Pero, además, en la Argentina no existen buenos y malos. Existen únicamente argentinos que miran hacia el pasado y consideran malos a los otros, monopolizando para sí el título de buenos. Esto no pasa solamente ahora entre peronistas y antiperonistas; ocurrió también antes entre radicales y conservadores.

Este conflicto ya resulta insostenible para un país que ha dejado de ser próspero y al que se creía imposible arruinar. Quiere decir que es imposible lograr que nuestra comunidad prospere, que sus integrantes progresen y logren elementales condiciones de dignidad para todos, con argentinos proscritos o marginados de la acción política. Tampoco creemos que el partido político sea la única forma de participación del hombre en la comunidad.

El ciudadano que la Revolución Francesa trató de constituir en el centro de toda la actividad nacional no satisface en el corriente siglo a todas las necesidades de manifestación y realización del hombre moderno.

Creemos profundamente en la necesidad de las comunidades intermediarias que se encuentran consustanciadas en la naturaleza humana; enraizadas en lo más profundo de la conciencia de un hombre que transita por mil distintos caminos hacia su participación comunitaria cada vez más amplia, más completa.

Creemos también que el partido político debe tratar de captar y encauzar todas estas diversas, múltiples expectativas. Para ello es imprescindible que los integrantes de la comunidad puedan sentirse interpretados por los partidos. Esto no se logra si un estatuto de los partidos políticos es real o aparente o potencialmente proscriptivo.

Si a sabiendas se pretende marginar sectores de la población, no resulta extraño que estos sectores a los que el régimen les ha negado participación política no crean en este sistema. No es de extrañar tampoco que quienes vivan largo tiempo marginados decidan apelar a la violencia para la obtención de lo que legítimamente desean y que arbitrariamente se les niega: la participación política.

Señor presidente: no creemos que este régimen que se vota sea perfecto. Por el contrario, lo consideramos excesivamente reglamentarista y con deficiencias. Sin embargo, como reglas básicas de juego para encontrar el camino del entendimiento de los argentinos y a fin de poder obtener la participación política de sectores marginados de la comunidad, lo apoyaremos en general, marcando en particular nuestra disidencia. Nada más. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Salmén.

Sr. Salmén. — Señor presidente: para la vida institucional del país el debate que se realiza sobre la ley orgánica de los partidos políticos

es de suma trascendencia. Ya en la Honorable Cámara de Diputados, representantes de los diversos sectores tuvieron oportunidad de expresar sus opiniones en torno al mismo. En esta Cámara, la mayor parte de los sectores representativos de la vida política de nuestro país también ha expresado su pensamiento con respecto a esta carta de los partidos políticos.

En general, ha existido una coincidencia: y es la que se refiere al excesivo reglamentarismo que campea en sus noventa artículos dispositivos; pero a este aspecto formal hay que agregarle una serie de deficiencias, como es, por ejemplo, una fraseología inconexa y muchas veces ambigua. Esto, unido a la extensión señalada, al excesivo reglamentarismo, no son solamente aspectos formales que caben ser citados, sino que entendemos, aunque en esto no participemos de muchas o de la mayoría de las opiniones, que estas fallas o deficiencias implican aspectos sustanciales que resulta necesario puntualizar. No habrá, a través de estas referencias en torno al tema en debate, ninguna expresión polémica ni peyorativa con respecto a las demás ideas señaladas con tanta claridad y con tanta vocación republicana en este recinto.

Pero importante es destacar que a través de la abundancia de frases y de artículos queda como saldo una discriminación ideológica en este estatuto, y entonces, para nosotros, para nuestra interpretación, resulta sólo aplicable para una democracia limitada.

Cuando se trata de reglar la vida y la existencia de los partidos políticos, que son los nexos indispensables entre el Estado y el pueblo y el instrumento más cabal de la democracia, indudablemente se penetra en un terreno arduo y difícil, donde las opiniones se controvierten y queda como saldo, muchas veces, nada más que la esperanza de dar un paso más adelante en el deseo de estructurar mejor nuestras instituciones para el presente y para el futuro.

Hay un aspecto que reviste singular importancia y es el de que se instaura, a través de esta disposición orgánica, una justicia ad hoc, cual lo es la justicia electoral nacional, que tiene su origen en el decreto 7.163, de 1962, del ministro Adrogué. Debemos señalar el peligro que significa dejar en manos de una justicia tan particular la organización, la actuación y también las posibilidades de desenvolvimiento de los partidos políticos, que son los órganos ejecutores de las expresiones de la democracia y que constituyen la más auténtica manifestación de la voluntad popular.

La justicia electoral nacional difiere fundamentalmente de la justicia ordinaria; y tanto es así que su relación con el Estado no se hace por intermedio del Ministerio de Educación y Justicia a través de la Corte Suprema, sino que se realiza por intermedio de un departamento eminentemente político como es el del Interior. Y esto, que es nada más que un as-

pecto, unido a otros pormenores esenciales nos lleva a establecer que no tiene, a nuestro entender, el máximo de seguridades el dejar la suerte de estos aspectos institucionales en manos de tal justicia, por cuanto ésta es, en realidad, dependiente, en mayor o menor grado, del Poder Ejecutivo. Y a través del mismo texto de este estatuto, en su extensión, en su elaboración y en su fraseología, se deja un amplio, amplísimo campo de esfera interpretativa que hace que el instrumento resulte endeble y con pocas posibilidades efectivas para el futuro.

Indudablemente, ha existido preocupación por estructurar mejor estas disposiciones. Al co-tejar este dictamen de la mayoría con el proyecto inicial del Poder Ejecutivo se advierten extraordinarias diferencias. Pero así y todo quedan subsistentes artículos como el 3º, inciso b), 22 y 23, que brindan posibilidades discriminatorias, limitativas, excluyentes y proscripciones.

La ley tiene, como rasgo esencial, la norma jurídica tiene como elemento diacrítico la permanencia. Este no es un instrumento orgánico para ser replicado por un solo gobierno, sino tal vez por muchos gobiernos y por muchos años en el país. Debió contemplarse, entonces, una realidad actual, que, indudablemente, está determinada por el signo de la transición, y prever las situaciones de este mismo estado objetivo de la vida política argentina, más que caer en pormenores de idealidades que escapan de los azarosos y difíciles momentos que se están viviendo, y lograr así estructurar y cristalizar una auténtica democracia basada en los fundamentos republicanos y representativos dentro del régimen federal que instaura la Constitución Nacional.

Estos principios destinados a fortalecer la acción de los partidos políticos y que de manera alguna pueden estar señalados con pormenores en la Constitución Nacional, por cuanto en el momento de su sanción éstos no tenían vigencia en nuestro país, y apenas se esbozaban en el mundo, deben ser tenidos en cuenta en estos momentos en que casi hemos llegado al tercer lustro de la segunda mitad del siglo XX, época extraordinaria, de amplias realizaciones, de gran aceleración, de profundas transformaciones sociales, políticas y culturales. De ahí que, pensando en ese proceso de aceleración, que ha hecho cambiar la dimensión con que se observaban los problemas, la dimensión tridimensional de nuestros mayores, de largo, ancho y profundo, por una dimensión tetradimensional, de orden témporo-espacial, en esta aceleración que se opera en el mundo, aspiremos a que nuestro país, ávido de progreso y de avance para procurar una mejor situación del pueblo argentino, tenga reflejadas estas mutaciones a través de los textos orgánicos que regulan la vida de instrumentos tan idóneos para el quehacer democrático, como son los partidos políticos.

Sin ánimo de abundar en torno de conceptos vertebrados con claridad en este recinto y sin el propósito de penetrar en aspectos polémicos, como los que atañen a los grupos de presión, a los grupos de interés, a los factores de poder y a los grupos de resistencia —que son realidades— y que deberán ser considerados como elementos capaces de coexistir con los partidos políticos, porque nada se puede regular en el orden social, si no se basa en una apreciación objetiva de los hechos y de los elementos que forman el accionar en la vida. Y estos grupos y factores, quíerose o no, señor presidente, existen en la Argentina y en el mundo. De ahí, entonces, que más que la aspiración de superarlos a través de normas, a través del derecho positivo, tenemos que buscar la superación de la vida democrática y de las bases de bienestar para nuestro pueblo. Tenemos que llegar a constituir una sociedad donde se viva en plena armonía y progreso, y para ello no deben existir posibilidades discriminatorias ni proscripciones de ninguna índole. Se ha andado mucho en el camino de la historia argentina. Azarosas épocas se han vivido, y después de esas duras faenas acrisoladas en la lucha, en el dolor, en el desconcierto, al entrar la contienda en el campo de la insidia y de las pasiones más vehementes, con las más duras reciprocidades, corresponde hacer un alto para un futuro mejor en la República y pensar que debemos evitar toda clase de discriminaciones y que toda norma que trate de evitarlas debe tener un carácter permanente y, por sobre todo, ser realmente objetiva, como lo demandan las circunstancias actuales, y ser además lo suficientemente clara para que ninguna justicia especial pueda torcer el espíritu de quienes legislaron, postularon y apoyaron tales disposiciones.

Nuestro bloque entiende, señor presidente, que ello no se ha logrado en este estatuto. No dudo de la buena fe de quienes lo han elaborado ni de quienes lo sustentan, signando el despacho. Pero sí pienso que la experiencia habrá de decir que han quedado intersticios por los cuales, a través de la fraseología abundante, se ha permitido que no se cumpliera cabalmente este texto orgánico que debía ser la base para toda una trayectoria de realización y de entendimiento en la Argentina. (*¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Acuña.

Sr. Acuña (R. E.).— Señor presidente: algunos argumentos vertidos en la víspera y otros escuchados esta tarde, determinan mi segunda intervención en el debate, intervención que ha de tener un carácter fugaz y que, sin duda alguna, contribuirá a esclarecer el pensamiento de mi sector y las consecuencias de este pensamiento contemporáneo con definiciones anteriores a la instalación de este gobierno, definiciones que integran el patrimonio moral, doctrinario e ideológico de la Unión Cívica Radical del Pueblo.

Dije que nuestro proyecto carece de sentido oportunista y de todo propósito utilitario, y señalé también que, fundamentalmente, más allá de las razones de tipo institucional que aconsejan dictar el estatuto, existía la urgencia de provocar, a través de la aplicación correcta de sus normas, el gran descongelamiento, el gran deshielo de los sectores proscritos de la vida política argentina.

Es indudable que no vivimos en el mundo tridimensional que menciona el senador Salmén ni en el cuatridimensional; vivimos en esta realidad del mundo y de la humanidad donde la dimensión que da el sentido espiritual, creador y permanente del género humano, es la propia vida, la quinta dimensión, que condiciona, nutre e insufla sus propias medidas a las otras, que se aplican a la medición del mundo físico, del universo material. Y esa quinta dimensión humana, trasladada al ámbito del acontecer político argentino, determina, de cierta manera, la necesidad de instrumentar los medios y los institutos adecuados para que este país, esta democracia y esta República puedan realizarse en la plenitud trascendente de sus posibilidades.

Yo no encontré, a través de las exposiciones de los senadores Snopek y Salmén, una impugnación concreta de intento proscriptivo. Sí encontré la duda cartesiana con respecto a las posibilidades de aplicación correcta del instituto, duda metódica y sistemática que no ha de lograr por cierto ensombrear los ámbitos de nuestra fe ni debilitar las fuerzas de nuestra vocación de servir con todo nuestro esfuerzo, con toda nuestra capacidad intelectual y moral al proceso de pacificación desde el cual nos lanzaremos a la reconquista de los horizontes perdidos por la República desde hace más de 30 años.

El señor senador Snopek, quiso demostrarnos que la valoración interpretativa del vocablo democracia podía conducirnos a la finalidad no querida por la ley, y nos dijo también que no era menester incluirla en el texto en discusión porque, sin duda, nuestra democracia era la que, omitiendo el término, se definía a través de una organización del Estado que asumiera la forma republicana y representativa.

Y yo puedo afirmar que la imprecisión del término citado es válida para juzgar cualquier otro vocablo jurídico utilizado en la propia Constitución. ¿Acaso el término República, que parecería ser el término preciso insoslayable, no desvirtuable ni sujeto a distorsión alguna, no ha demostrado, a través de la historia, que tuvo una vida polivalente, de acuerdo con los fines llamado a servir y definir? ¿No hubo una República Socialista Alemana que instauró, bajo ese título, el sistema corporativo y la plenitud del Estado racista y discriminatorio?

¿Acaso las palabras «república socialista» no definen una forma de gobierno extraña al estilo y a la interpretación que los países de Occi-

dente otorgan a la vieja palabra empleada en la república mística de Platón?

¿Acaso las repúblicas nacidas a la par de la Reforma, las que integran la Liga Hanseática alemana o las tumultosas de la Italia del Renacimiento, no son floraciones distintas a esta que define el Preámbulo de nuestra Carta Magna?

¿Acaso la palabra «representativa» tiene un valor absoluto y eterno que escapa a las leyes de la vida? ¿Podemos decir que la representatividad corporativa es la misma representatividad democrática que instaló al pueblo indivisible como protagonista de la historia, sujeto y fin de la legislación contemporánea? ¿Acaso nosotros somos, de acuerdo con nuestra organización, el símil de la representatividad de los Estados franceses previos a la Revolución de 1789: el clerical, el de la nobleza y el llano?

La imprecisión de los términos surge de la valoración que la historia les imprime en su curso y desarrollo.

Si buscamos valores absolutos, no los encontraríamos incluso en el texto del Preámbulo de la Constitución. Las palabras «justicia», «seguridad», «bienestar», «bienestar general», etcétera, están saturadas de ingredientes históricos, sociales, económicos y éticos y sufrieron mutaciones y metamorfosis, como la propia República, a través de su desarrollo institucional.

Las críticas y sospechas del senador Snopek no servirán para prestigiar la correcta aplicación de la ley; en cambio, dan argumentos para una valoración tortuosa de la misma, por algún juez venal que sobreviva en esta época de austeridad y buena fe en el trato y en la conducción de los negocios públicos.

Señor presidente: tampoco la palabra democracia significa para nosotros lo que interpreta el senador Snopek como la versión contemporánea del vocablo. Ella no viene adherida a ningún sistema económico, vigente o perimido. El error consiste en que se pretende identificar democracia con democracia capitalista, cuando, en realidad sólo guarda vinculación directa con el llamado liberalismo político.

En consecuencia, una democracia es, además de gobierno en el que el pueblo se expresa en la plenitud de su soberanía y con auténtica y plena libertad, el régimen donde existe un sistema de derechos y de garantías que excluyen la intervención del Estado en aspectos fundamentales de la vida del hombre.

Cuando el hombre puede reivindicar frente al Estado la existencia de derechos inalienables; cuando puede reivindicar frente al Estado el ejercicio de actividades que no pueden ser avasalladas; y cuando se expresa a través de su espontánea deliberación soberana, existe una democracia. Y cuando a ello le sumamos los principios de igualdad frente a la ley y de representación popular, sólo esclarecemos y profundizamos el sentido socio-histórico-político del término.

Señor presidente: también la víspera se dijo que podía ser declarada la extinción de un partido en el caso de que un dirigente o funcionario representativo, emanado de las filas partidarias, tanto en la práctica, cuanto en su accionar exterior, difundieran ideas, doctrinas y programas que violen lo preceptuado por el artículo 3º o auspicien la concentración viciosa de poderes. Tampoco en este caso el juicio responde a la verdad rigurosa de los hechos, porque el proyecto habla del partido a través de sus autoridades o candidatos, es decir, cuando el partido actúa como tal, no cuando el candidato actúa en nombre del partido. Concretamente: cuando el partido establece una conducta, una forma de actuar y de comportarse, que importe la desvirtuación de los principios llamados a defender y a proclamar.

No entiendo entonces cómo el hecho de que un candidato o un dirigente profese —públicamente— ideas contrarias al bienestar general, a la democracia representativa, a la República, o los principios objetivos del Preámbulo, constituirá causal para que un juez determine en sentencia la extinción de la personería y, por lo tanto, la extinción del partido como agrupación política.

Por otra parte, como lo dije al principio de esta exposición, el estatuto en debate es la consecuencia y el epílogo de una larga lucha partidaria. Ya en el año 1963 el comité nacional de nuestro partido decía expresamente: «El Estatuto de los Partidos Políticos debe tender a asegurar la autonomía funcional de los partidos y a robustecerlos y perfeccionarlos, pues son órganos necesarios de la democracia e insustituibles del sistema representativo y republicano de gobierno». Aquí están las palabras: democracia republicana representativa, las mismas que encontramos en el estatuto y que no fueron materia de una discrepancia triunfante en la votación de la Cámara baja, donde todos los sectores, con exclusión de algunos minoritarios y especialmente del MID, dieron su apoyo y no formularon objeción a su inclusión en el texto del proyecto en debate.

Más adelante, la antedicha declaración nos dice: «Cualquier reforma del Estatuto de los Partidos Políticos o del régimen electoral debe señalar una auténtica representatividad popular, de manera que todos los sectores puedan tener idénticas posibilidades, derechos y deberes, de forma que aseguren garantías plenas de igualdad ante la ley para todos los sectores ciudadanos y consagre normas imperativas que permitan y obliguen la constitución de partidos políticos democráticos con recaudos para el cumplimiento expreso de los principios previstos en la Constitución Nacional, de contenido democrático e impersonal, con recursos cuyo origen sea legítimo y debidamente acreditado».

Yo aspiro a que se diga, de manera concreta, dónde está sembrada la simiente proscripiva.

De dónde va a surgir una interpretación mendaz, deleznable, venal, para que pueda desvirtuarse el contenido, los propósitos y el fin de la ley que vamos a votar. Todo acontece en el mundo subjetivo de las valoraciones personales. No es que la ley contenga los elementos positivos de su propia distorsión. Y, lógicamente, señor presidente, yo me pregunto si, a pesar de las reiteradas manifestaciones de buena fe del legislador y de buenos propósitos del partido gobernante, alguien no quiere en el fondo que este instituto surja marcado por la posibilidad de nuevas proscripciones o que se malogre en el propósito de sanear el origen y funcionamiento de los partidos. Porque es indudable, señor presidente, que alguien quiere la proscripción. Alguien no quiere marzo. Marzo es la gran cita del país para la grande y fecunda coincidencia nacional. Y si este estatuto no se aplicara y no rigiera, no sé de qué manera y por qué camino lograríamos el gran descongelamiento a que aludía al principio de mi exposición.

Estas manifestaciones de mi partido son concordantes con otras anteriores. En el año 1962, en la plataforma electoral de la Unión Cívica Radical del Pueblo, encontramos estas definiciones: «Política de pacificación nacional; afianzamiento de la libertad del ciudadano; preservación de la democracia; eliminación definitiva de todas las formas de coacción y violencia; legislación adecuada a los fines y principios de la libertad consagrados por la Constitución Nacional e imposibilidad de vulnerar por vía reglamentaria los derechos individuales y sociales, y mantenimiento inalterable del respeto a las conciencias religiosas de todos.» Definiciones generales válidas para ser traídas a la memoria en las soluciones concretas que vamos dando desde el 12 de octubre de 1963.

Y este estatuto, previsto ya en las definiciones partidarias, en la plataforma del radicalismo del pueblo, es una de las obras que vamos a consumir para el logro de la pacificación a que se refería el documento citado; la pacificación que se va instrumentando a pesar de las provocaciones, a pesar de los descreimientos, a pesar de todas las vicisitudes creadas en el presente por consecuencia de los hechos del pasado; la pacificación será lograda y este estatuto será sin duda alguna un instrumento idóneo para el cumplimiento de esos fines.

En el debate en particular tendremos que efectuar la exégesis de cada uno de los dispositivos del estatuto. Allí probaremos que ninguna de las objeciones formuladas puede sobrevivir al análisis de buena fe que realicemos. Para esa oportunidad, señor presidente, reservo mi derecho de usar de la palabra. Nada más. (*¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Snopek.

Sr. Snopek. — Señor presidente: no podemos silenciar las exposiciones que se han realizado

esta tarde, particularmente a través de la representación más expresiva de las fuerzas tradicionales que actuaron en el escenario político de la República. Por ello he de tratar de constatarlas por su respectivo orden.

Reiteramos en esta oportunidad nuestras reservas sobre el proyecto de ley que se considera, que —insistimos— da amplio margen para interpretaciones dispares. Diríamos que los términos poco claros que tienden a sembrar confusión, van a colocar al país en un clima de incertidumbre o ambigüedad que no es propicio para la pacificación y el orden.

En una exposición de carácter general expresaría que no hay —como se ha dicho— el propósito de coartar la libertad de conciencia; que el estatuto no contiene proscripciones. Pero, indudablemente, en el estatuto están los gérmenes o fermentos patógenos que pueden imposibilitar la reconstrucción nacional.

No vamos a referirnos a pensamientos actuales, tratándose de la política tradicional. Trataremos de ir a las mismas fuentes, aunque no muy remotas. Traeremos a colación ante este Honorable Senado, con respecto a las fuerzas de carácter conservador, el pensamiento progresista de Ramón J. Cárcano, expresado en su mensaje del 19 de mayo de 1914. En esa oportunidad, siendo gobernador de Córdoba, Cárcano quería la fortificación de los partidos. Como en la Grecia antigua, como en el espíritu helénico puro, no concebía a aquellos que se encontraban en la pasividad política. Y marcando a fuego a los titulados independientes, se expresaba de la siguiente forma: «Los grupos independientes, extraños a todos los partidos, son más perjudiciales que los indiferentes en la vida de la democracia. Estos son fuerzas negativas; aquéllos son fuerzas positivas, y ambos son fuerzas perturbadoras de las contiendas cívicas sanas y viriles. El individualismo, tan hinchado y suficiente en nuestro medio, ha engendrado el político independiente. Una sensible confusión de conceptos y aptitudes. En las relaciones colectivas la independencia consiste en elegir libremente la propia orientación, nunca en brindarse en presión, interés, perjuicio o importancia personales. Esta situación significa el aislamiento, el egoísmo, la debilidad o el acecho.»

Pero Ramón J. Cárcano incluso reniega de la clase conservadora que se estanca, que permanece pegada a las viejas estructuras. Siempre nos estamos refiriendo al mensaje aludido de 1914. Dice de esta suerte Cárcano: «La clase acomodada o conservadora se desinteresa cada vez más de los asuntos públicos. El egoísmo y la indiferencia constituyen un estado crónico; ningún esfuerzo, ningún movimiento, porque sus ideales prevalecen en los políticos de carrera, y los políticos dominan el país por los comités electorales. El pueblo elige a sus representantes, pero el comité le proporciona los candidatos y del comité, instrumento indispen-

sable de lucha y de triunfo, está siempre ausente la clase conservadora.»

Pero Ramón J. Cárcano tampoco temía a los partidos nuevos, a las asociaciones progresistas, ni a las ideas nuevas, y da en este mensaje de 1914 un lema, que podría ser permanente, no sólo para su partido, sino para otros que realmente amen la libertad y el progreso de la patria. Así expresa el doctor Ramón J. Cárcano: «El desarrollo de los partidos avanzados, su intervención en el gobierno por la voluntad del comicio libre, no es un temor ni una amenaza para el país. A la República nunca puede alarmarle, ni menos poner en peligro sus instituciones la expresión viva de su propia soberanía. Podrá perfeccionarla, lo que constituye una aspiración común, pero jamás destruirla, lo que significaría un ataque sin razón. Fuera del límite de la mayor edad, la conciencia y autonomía local de sí misma, restringir la universalidad del sufragio, que es una conquista inalienable, y despojar de indispensable garantía a la independencia del voto, sería abrir las puertas al desorden, llamar a la anarquía, y conspirar contra la vida fuerte de la democracia.»

Y luego entre otros conceptos igualmente señeros, dice el doctor Ramón J. Cárcano, siempre en su mensaje como gobernador de Córdoba en el año 1914: «Los gobiernos que se sienten inseguros y débiles delante de la opinión, están en retardo respecto de las aspiraciones de la opinión. Los peligros se conjuran por la concordancia, el trabajo, la construcción útil y eficaz, y no por las rendijas de la ley.»

Con criterio argentino, con pasión argentina hubiéramos deseado que este estatuto fuera menos amplio y más claro. Incluso esta larga discusión hace recordar este pensamiento duro que nos suelta a nosotros un pensador oriental. Dice así: «En Occidente, un hombre se enamora de una teoría y otro de otra, y ambos proceden a demostrar su teoría y el error de la adversa, con gran cultura y estupidez.»

Pareciera que los argentinos no tuviéramos en cierto momento la suficiente inteligencia para concordar en lo que la patria necesita para solucionar sus grandes problemas. Y nos envolvemos en discusiones, y a veces en la sutileza de las palabras como bien lo acaba de decir el senador preopinante. Es que resulta a veces, que en la sutileza de las palabras están los gérmenes que rompen el orden y provocan la lucha. Lo que carcome el ordenamiento jurídico.

Nos llama, por ejemplo, profundamente la atención, que dentro del pensamiento radical, se olviden las grandes lecciones del maestro. Hemos de recordarlas en tres documentos muy importantes de la vida de Hipólito Yrigoyen. El último, precisamente termina refiriéndose al pensamiento del maestro radical sobre los partidos políticos que, con permiso de la Presidencia y del Honorable Senado, que ha sido, hasta ahora, tan condescendiente, vamos a leer, porque

no somos capaces de memorizar los pensamientos respectivos de Hipólito Yrigoyen. Si tratáramos de memorizarlos, a lo mejor también como puede ocurrirle al estatuto, las palabras traicionarían el pensamiento.

Sr. Fassi. — A lo mejor se contagia el señor senador.

Sr. Snopek. — Solemos beber de las buenas fuentes y éstos son buenos contagios.

Sr. Fassi. — De las mejores de todas, en este caso.

Sr. Snopek. — Decía Yrigoyen en el mensaje de 1917, su primer gobierno: «El problema no consiste en saber quiénes han de gobernar a la Nación, sino en la recuperación de sus facultades soberanas para restaurar la legitimidad de sus representaciones públicas tal como lo ha impreso en sus estatutos, como lo ha grabado en su historia y como lo reclama su civilización y su cultura. La solución benéfica no está en el triunfo de determinadas fuerzas, sino en que sea lo que fuere, lo tenga justo y legalmente.» Son palabras que conservan aún su fresca actualidad.

Luego Yrigoyen, en la primera circular a los gobiernos de provincia, en el año 1922, dice lo siguiente: «Es necesario extinguir hasta los últimos resabios de las perversiones del pasado, y para ello deberán ser amparados con la mayor rectitud todas las justas reclamaciones, solucionando las dificultades que obstaculicen el libre acceso al comicio y evitando todos los conflictos que puedan apasionar los ánimos de las agrupaciones en lucha y provocar sucesos dolorosos que deben desaparecer para siempre en las prácticas de nuestra democracia.» Y agrega en esa misma circular: «Hoy las leyes afianzan su imperio y en verdad prevalece sobre los actos de violencia y las maniobras de fraude que constituyeron un sistema bajo el régimen condenado por el pueblo argentino que ha comprobado reiteradamente la capacidad política que le negaron los detentadores del poder en el pasado para usurparles sus derechos y perpetuar ilegítimos predomios. Todo debe disponerse, pues, cuidadosamente para que la libertad electoral ampliamente asegurada impulse a los ciudadanos al cumplimiento de su ejercicio.»

Yrigoyen era un hombre que escribía muy bien y cuidaba mucho su lenguaje. La palabra «cuidadosamente» que emplea en esta circular a los gobiernos de provincia del año 1922, como también lo de la «libertad electoral ampliamente asegurada», llama seriamente a la reflexión sobre el sentido liberal y asegurativo de todas las libertades en el pensamiento yrigoyeniano.

Pero antes de su caída, precisamente el 28 de febrero de 1930, Yrigoyen enseñó lo siguiente: «Los gobiernos están en el deber de asegurar la más amplia libertad de acción a los partidos, colocándolos a todos en igualdad de condiciones a fin de que, desenvolviéndose dentro de su

órbita legal, se hallen totalmente amparados en el ejercicio de sus derechos.»

«Hemos traído a colación este pensamiento de Hipólito Yrigoyen y los correlativos del mensaje del doctor Ramón J. Cárcano como gobernador de Córdoba para indicar en qué forma y de qué manera las fuerzas tradicionales del país, a través de hombres que fueron ejemplo y guía de las respectivas fuerzas políticas, jamás pudieron prohibir proscripciones directas o indirectas.

Estamos seguros de que el estatuto por sí no proscribía. Pero lo grave es que puede ser utilizado como instrumento para la proscripción. Eso es lo que nos hemos permitido destacar.

Nos place sobre manera que el señor miembro informante de la mayoría haya traído esclarecimientos muy útiles y necesarios a este debate, particularmente cuando habló de la deformación del término República a través del fascismo alemán. Pero yo digo que ha sido más deformada todavía la voz «democracia»... Los hombres que están viviendo detrás de la cortina de hierro —en mi concepto una forma de determinada esclavitud— también se titulan democráticos, y para desgracia, o como si fuera una ironía, se titulan populares; se denominan «democracias populares», que habrían nacido del paraíso prometido a través de la «dictadura del proletariado».

Pero el término democracia en sí, no está tan deformado como el «democrático» que emplea la ley, vocablo éste que ha sufrido múltiples y variadas deformaciones. Ayer, en el debate en general, pusimos de manifiesto que ciertamente puede dar lugar a interpretaciones antojadizas, y que a través de eso podría llegarse a la aplicación tortuosa y deformada de la ley. Y creemos que esa deformación o esa aplicación tortuosa de la ley no va a conseguir el propósito tan noble proclamado por el señor miembro informante de la mayoría de buscar el gran descongelamiento de los sectores prosritos, ni puede ser capaz de realizar el gran proceso de recuperación que el país necesita para ganar las horas perdidas y los instantes muertos, y para que se abran los horizontes amplios a que tiene derecho el destino argentino.

El representante del movimiento de intransigencia y desarrollo (*Risas*)... me rectificó. de integración y desarrollo, ha puesto énfasis en la crítica a la justicia electoral. Nos parece que en ese punto le asiste sobrada razón. Pero entendemos —con espíritu distinto al del señor senador por Santa Fe— que el país ya no resiste más proscripciones. Es la verdad. Una nueva proscripción puede originar ya no sólo la agitación; puede llevarnos al clima necesario que advenga —sea fría o caliente— la guerra civil argentina. El argentino quiere participar del quehacer político, y toda proscripción va a originar necesariamente el caldo de cultivo para los amotinamientos o las rebeliones.

Si en este debate cansamos con nuestras dudas y con nuestras incertidumbres es porque precisamente tratamos de prevenir los golpes palaciegos o de Estado. Los enemigos de la democracia, esos grupos aislados que cometen actos de violencia y hasta diría de barbarie, no están en la especulación limpia de la legalidad.

Cuando en el debate de ayer decíamos que la democracia argentina no es informe ni bastarda, sino una democracia perfectamente formada e institucionalizada, y que es la consagrada por la Constitución de la Nación Argentina, dábamos una definición precisa que no se prestaba a ningún equívoco. No amamos otra democracia que la que está dada por la Ley Fundamental de la República en este momento y en esta hora, porque ella nos brinda no sólo la experiencia del pasado, la forma como vamos a reglar este presente tan cargado de vicisitudes, sino que también nos fija el camino y los derroteros para solucionar a nuestros hijos los problemas de su porvenir.

Cuando el señor senador por Corrientes hablaba en defensa del federalismo argentino, adheríamos a esa parte de su discurso, de todo corazón. El federalismo es una de las formas de nuestra democracia. Aquel pensamiento que tomó Joaquín V. González de un doctrinario norteamericano, de que nuestra federación era la unión indestructible de Estados indestructibles, está vigente no obstante la disposición del artículo 13 de la Constitución Nacional. Porque en ese caso el federalismo no se destruye sino que se transforma.

El temor de incluir el respeto a la forma federal en el Estatuto de los Partidos Políticos ha sido injustificado, en tanto que nuestros temores sobre la interpretación los estimamos plenamente justificados, más cuando ella es puesta en manos de una justicia que no es digna de tan augusta jerarquía.

Ayer, quizá con un poco de nerviosismo y de cansancio, expusimos un pensamiento propio sobre esa justicia. Ahora, para confirmarlo, nos vamos a remitir a un pensador ajeno, e incluso de otro país, pero, que por su autoridad y pensamiento democrático no puede ser puesto en duda por nadie: me refiero al profesor Eduardo J. Couture.

Dice el maestro Couture precisamente refiriéndose a esta suerte de deformaciones de la ley: «El juez es una partícula de sustancia humana, que vive y se mueve dentro del derecho; y si esta partícula de sustancia humana tiene dignidad y jerarquía espiritual, el derecho tendrá dignidad y jerarquía espiritual. Pero si el juez como hombre cede ante sus debilidades, el derecho cederá en su última y definitiva revelación.» Y agrega esto, precisamente para referirse a que también por medio de los jueces puede producirse una suerte de dictadura, tan peligrosa como la ejecutiva: la dictadura judicial.

Dice Couture: «Uno de los grandes dramas del nacionalsocialismo fue el de haber creado toda una doctrina autoritaria del derecho; de haber hecho del juez el *Führer* del proceso; y lo menos que dijo la experiencia jurídica fue que esa concepción era trágica, no ya porque el sistema pudiera ser manejado por los hombres sino porque los hombres eran manejados por el sistema. De la dignidad del juez depende la dignidad del derecho; el derecho valdrá en un país en un momento histórico determinado lo que valgan los jueces como hombres.»

Pero vamos más allá. Los jueces no sólo son hombres, vale decir, no dioses; no sólo son fallibles, sino que sus resultados son sus resoluciones, sus sentencias. Puede pensarse que el juez puede ser un hombre malo y sus sentencias buenas; puede concebirse esa hipótesis. Pero vemos cómo Couture pone ese sello de desconfianza también en el trabajo de los jueces, en el arte del juez que es la sentencia. Dice Couture lo siguiente: «La sentencia podrá ser justa o injusta porque los hombres necesariamente se equivocan. No se ha inventado todavía una máquina de hacer sentencias. El día en que sea posible decidir las causas judiciales como se deciden las carreras de caballos, mediante un ojo eléctrico que registra físicamente el triunfo o la derrota, la concepción cuantitativa del proceso carecerá de sentido y la sentencia será una pura declaración, como quería Montesquieu. Pero mientras no pueda lograrse esa máquina de hacer sentencias, el contenido humano, profundo y entrañable del derecho no puede ser desatendido ni desobedecido, y la sentencia valdrá lo que valgan los hombres que la dicten.»

Es verdad. La justicia electoral es una justicia humana y, como bien se ha dicho, estrictamente ligada a lo político. Cuando ayer se traía a colación en este recinto la hermenéutica jurídica, decíamos que había que tener cuidado de no confundirla con la hermenéutica política. La hermenéutica jurídica puede estar dominada por principios estrictamente doctrinarios, por la enseñanza de los autores, por una jurisprudencia establecida y trabajada durante —no se habla de años— siglos. Lo grave de este asunto es que en esta materia no existe doctrina ni jurisprudencia sentada por años ni por siglos. De este estatuto va a nacer una jurisprudencia cuyo destino y orientación ignoramos. El país se encuentra en una encrucijada. Ayer hablábamos en un tono general de las distintas hipótesis que se planteaban al país. Ya nos hemos de referir respecto de otros puntos en particular. Pero entre tanto tenemos que dejar sentado que este Estatuto de los Partidos Políticos nos hace pensar nuevamente que sólo el día en que el hombre realice el justo equilibrio entre la libertad y la autoridad, entre el ciudadano y el orden jurídico, como lo enseña también el maestro Couture, se habrá solucionado la fórmula viva del derecho.

Diremos que este estatuto no logra ese equilibrio y que lo pone en peligro. Coloca a muchos sectores o asociaciones políticas, para emplear el título de una novela famosa, en «el filo de la navaja». Y no podemos terminar nuestra exposición sin recordar que ya Bernanos, en ese libro titulado *Le scandale de la vérité*, planteaba un problema análogo al que nosotros nos planteamos en torno al equilibrio entre el ciudadano y el ordenamiento jurídico, entre la libertad y la autoridad. Bernanos se formulaba el interrogante de si valía más la vida o el honor, e indudablemente habría que contestar que lo que los hombres deben aspirar no es a plantearse el dilema sino a que el dilema no exista. Hay que vivir con honor. En este caso no es posible que el gobierno cree el dilema. Hay que hacer todos los esfuerzos para que la libertad no perezca por abuso de la autoridad y viceversa: buscar que la autoridad no perezca por abuso de la libertad, o sea por el libertinaje o la anarquía. Son los términos en que lo ha planteado nuestra Corte Suprema: ni despotismo ni anarquía. Las palabras confusas de este estatuto no logran el perfecto equilibrio y la perfecta armonía de los extremos necesarios para configurar el orden jurídico. Quisiera, sí, que su aplicación desmienta mis palabras, para bien de la patria y para bien de todos los argentinos. Nada más.

Sr. Presidente. — Se va a votar en general el dictamen de la mayoría.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — En consideración en particular.

Sr. Fassi. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fassi.

Sr. Fassi. — Como se trata de una ley larga y se ha avanzado ya en la consideración de algunos artículos en particular, solicito que se ponga a votación capítulo por capítulo.

Sr. Presidente. — En consideración la moción que acaba de formular el señor senador Fassi.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Snopek.

Sr. Snopek. — Nos hacemos eco de los propósitos de acortar el debate que, sin lugar a dudas, inspiran al señor representante de la mayoría. Pero se trata de una materia extremadamente delicada y por eso nos vamos a oponer al tratamiento por capítulos, y pedimos, en cambio, que se observe el tratamiento por artículos. Fundamentamos nuestro deseo en que en este caso —permítaseme la metáfora— las palabras son más que oro, son justicia y en el más alto sentido de la palabra: justicia política.

Cuando un pueblo carece de justicia política también puede llegar a carecer de justicia civil. Como que los pueblos que carecen de libertad política, normalmente suelen perder todas

sus libertades. Por ello vamos a sostener, aun en perjuicio de la brevedad, que se considere este proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Diputados votando artículo por artículo, luego de ser examinado con toda claridad y precisión. Y lo que no habíamos hecho en lo que respecta a la consideración en general, lo solicitamos ahora: que ciertos artículos se voten nominalmente para que quede sentado perfectamente el criterio, ya no de los distintos sectores, sino de los distintos partidos políticos en lo que a este estatuto o proyecto de ley respecta. Esto tiene una trascendencia no sólo para este momento; considero que tiene incluso una importancia histórica relevante, que va a trascender en el futuro. Por eso, incluso, señor presidente, vamos también a formular una moción de orden en el sentido de que se repita la votación en general y se realice nominalmente. Y creo que en esto me van a acompañar todos los señores senadores.

En concreto, señor presidente, formulo moción para que luego de votarse la moción del señor senador Fassi, se reconsidere la votación realizada al único efecto de que ésta sea nominal.

Sr. Presidente. — La Presidencia quiere advertir que debe votarse por partes. En primer término la moción del señor senador Fassi...

Sr. Fassi. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fassi.

Sr. Fassi. — Señor presidente: entendía que iba a haber asentimiento general de la Cámara, pero, no habiéndolo, me someto al reglamento. Quiero aclarar que tenemos el firme propósito de darle al Poder Ejecutivo —que es darle al país— la ley impositiva, que también debemos tratar en la sesión de la fecha. De tal modo que vislumbrándose, sin que esto signifique arrojar una sospecha sobre el pensamiento del señor senador, que se quiera emplear este debate para impedir que sancionemos con tiempo las leyes que el país requiere, desde ya indico que si esta sospecha se ratifica en la consideración de los primeros artículos, pediremos el desplazamiento de esta materia para tratar previamente la ley impositiva, y mi sector se compromete a quedarse en el recinto hasta terminar luego con la ley de los partidos políticos.

Hago esta advertencia, señor presidente, porque pareciera creerse que estamos imponiendo una ley de partidos políticos cuando la realidad es que esta Cámara le está dando al país y a todas las fuerzas políticas argentinas una ley de partidos políticos. Es hora, señor presidente, de que se haga fe en la conducta y en la sinceridad de los hombres que formamos la mayoría de este cuerpo y que gobernamos la República, porque nuestro comportamiento no justifica las sospechas que reiteradamente se lanzan en el seno de este cuerpo deliberativo.

Pareciera ser que los señores senadores, que han estado clamando al cielo contra el Estatuto de los Partidos Políticos que rige en la actualidad y que ha sido, según ellos, el instrumento que les ha impedido llegar al gobierno de las propias provincias lo prefieran al que estamos tratando en este momento. Hay una contradicción en esta conducta. Y nosotros, en consecuencia, señor presidente, no nos podemos prestar a un juego que impida que demos al país las leyes que éste necesita para que la administración marche al día, para que los empleados cobren los sueldos, para que los proveedores del Estado puedan percibir sus facturas. Es decir, para que siga el proceso que ha permitido que superemos la crisis que vivió la República.

De manera que, señor presidente, con estas palabras queda retirada la moción que había formulado en el sentido de que se vote capítulo por capítulo, y vamos a hacerlo artículo por artículo.

Sr. Salmén. — Pido la palabra.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Snopek.

Sr. Blanco. — Que se vote, señor presidente.

Sr. Snopek. — Las palabras que se acaban de pronunciar no pueden quedar, por su gravedad, sin la condigna respuesta...

Sr. López. — Hay una moción de orden, señor presidente.

Sr. Snopek. — Se están discutiendo dos mociones.

Sr. López. — Que se vote la de orden, señor presidente.

Sr. Snopek. — Si se nos va a imponer, señor presidente, una moción mordaza...

Varios señores senadores. — No hay moción mordaza.

—Hablan varios señores senadores simultáneamente, y el señor presidente agita la campanilla.

Sr. Blanco. — El señor senador hace obstrucción.

Sr. Presidente. — Ruego a los señores senadores no dialogar ni hablar en conjunto.

Señor senador Snopek: se está tratando una moción que ha sido retirada, de manera que no existe asunto en discusión, porque el autor de la iniciativa la ha retirado. Es una moción de orden, señor senador.

Sr. Snopek. — Se han pronunciado acusaciones muy graves, señor presidente.

Sr. Presidente. — Si el señor senador entiende que esas palabras lesionan sus fueros, podrá plantear la cuestión de privilegio correspondiente. Como la moción de orden ha sido retirada, no hay asunto en discusión.

Está en consideración la moción del señor senador para que se vote nominalmente.

Se va a votar la moción del señor senador Snopek en el sentido de que se efectúe una votación nominal.

—Se vota y resulta negativa.

Sr. Presidente. — Se va a considerar en particular.

Sr. Salmén. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Salmén, siempre que no se refiera a un asunto que ya ha sido debatido.

Sr. Salmén. — No, señor presidente.

Había pedido la palabra anteriormente y, en realidad, debía ser ésta la instancia, luego de la votación efectuada.

En honor a la brevedad, que es deseada y auspiciada por todos los sectores, solicito la inclusión de un proyecto de Estatuto de los Partidos Políticos que consta de 25 artículos, para evitar proponer en cada artículo que se considere otro que lo sustituya, tarea que resultaría engorrosa y pesada para este honorable cuerpo.

Solicito, en consecuencia, se incluya el aludido proyecto, que es similar al presentado por los representantes de nuestro sector en la Honorable Cámara de Diputados.

Sr. Presidente. — Si hay asentimiento, se hará la inclusión que propone el señor senador Salmén.

—Asentimiento.

Sr. Presidente. — Habiendo asentimiento, se incluirá el proyecto a que se ha referido el señor senador. (1)

Se va a considerar en particular el dictamen de la mayoría.

Sr. Blanco. — Solicito que se omita la lectura de los artículos, en razón de hallarse impreso el despacho.

Sr. Snopek. — Adhiero, señor presidente.

Sr. Presidente. — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

—Se enuncia el artículo 1º y dice el

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Snopek.

Sr. Snopek. — Ya en la discusión en general de este proyecto formulamos observaciones al apartado 1º del artículo 1º. Ampliando las mismas hemos de señalar que la Unión Cívica Radical, en septiembre de 1949, al discutirse un proyecto sobre esta misma materia, expresó las siguientes palabras por intermedio del diputado Pérez Martín: «El funcionamiento de los

(1) Véase el Apéndice.

partidos políticos no es que deba ser pura y únicamente para actos electorales. Los partidos políticos como instrumentos de gobierno deben funcionar siempre y no solamente para actos electorales. Tienen función permanente en la vida pública. Tampoco puede decirse que su finalidad sea el ejercicio de los poderes públicos, porque lo que los partidos ejercitan es el poder político, ponen en movimiento los derechos políticos de los ciudadanos.» En mérito a ello, y en relación también con la materia del artículo siguiente, el diputado Pérez Martín, en nombre del radicalismo, siempre en la sesión de septiembre 28/29 de 1949, y que consta en las páginas 4230 y 4231 del Diario de Sesiones, propugnaba por que se redactara un artículo de la siguiente forma: «Los partidos políticos, a los fines de su reconocimiento como tales, presentarán ante el juez del registro la siguiente documentación: acta de su constitución, nombre, programa de gobierno, acta de designación de autoridades y de sus representantes apoderados, carta orgánica y manifestación de sus fondos.»

El diputado Pérez Martín bregaba en esta forma por la simplicidad, sencillez y claridad que debe tener un estatuto de esta naturaleza, que nos hace pensar que el radicalismo del pueblo era más sabio como oposición que como gobierno. Tanto es así que en esta oportunidad podemos decir, contestando a una alusión anterior, que no tenemos cuidado, pues nuestra divisa ha sido la siguiente: primero la patria, después nuestro movimiento y luego los hombres. Por nosotros no se va a frustrar el presupuesto de la Nación. Vamos a estar aquí, no obstante que no hemos dispuesto del tiempo necesario para realizar un estudio exhaustivo del presupuesto y de la ley impositiva, que son instrumentos muy extensos. No vamos a realizar una oposición estéril o inútil. Repito que primero está la patria.

Renunciamos a cualquier cosa, a nuestras propias ideas, por el bien del país, posición que adoptaremos en todo instante. Ya lo hemos demostrado, señor presidente, con una conducta pública en todas las instancias y en todas las horas.

En mérito a ello es que tampoco vuelvo sobre la confusión gravísima que trae la utilización del término «democráticos» en este artículo 1º, inciso 1º, del proyecto sobre Estatuto de los Partidos Políticos que viene de la Cámara de Diputados. Con toda razón el proyecto del señor senador Bassi suprime el término, y con un lenguaje más preciso y más seguro se remite a lo expresado por la Constitución, instrumento sagrado que ha unido a las generaciones de argentinos que nos antecedieron y que debe unir también a las actuales generaciones. Por respeto a la Constitución, incluso a su léxico, sentido y espíritu, es que nuestro bloque va a votar en contra del artículo 1º del estatuto que se considera.

Sr. Acuña (R. E.). — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Acuña.

Sr. Acuña (R. E.). — Es para manifestar, señor presidente, que la comisión no acepta.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 1º.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación se vota y aprueba el artículo 2º.

—Al enunciarse el artículo 3º, dice el

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Snopek.

Sr. Snopek. — Respecto de este artículo habíamos manifestado también en la discusión en general nuestras serias y graves reservas. Es un artículo que se presta para la inestabilidad de las agrupaciones o partidos políticos. Los términos «condiciones sustanciales» dan pie para que se pida la anulación de las personerías políticas reconocidas a través de términos o palabras que no tienen una sola significación, sino que pueden ser objeto de diversas acepciones. Cuando se habla de política nacional que promueva el bien público se está haciendo referencia a un término lato, amplio, una frase que da lugar o que se presta a las más diversas y aviesas interpretaciones, incluso cuando se habla así no más del «régimen democrático». Si la interpretación se va a dar en función de la Constitución Nacional, nosotros estaremos de acuerdo con el texto del artículo. Pero no es así; hemos puesto duda sobre la forma en que puede ser interpretado este artículo, y es necesario que se diga con claridad que so color de la frase «política nacional que promueve el bien público» o «régimen democrático» no renazcan en una nueva forma las proscripciones electorales de las que amplios sectores del pueblo argentino han sido víctimas.

La proscripción electoral, debemos decirlo con claridad, es una forma sutil y estilizada del fraude. En sesiones pasadas decíamos en este recinto que temíamos que se alejaron las proscripciones legales y que se iniciara la etapa de las proscripciones judiciales. Se ha adueñado de nosotros ese temor, y con razón. En artículos de tanta amplitud como el que estamos tratando hay diversas frases, no sólo la que he puntualizado, que pueden dar lugar a que se niegue personería en casos justos y en supuestos en que corresponda acordarla.

Las palabras empleadas incluso por el inciso a), que sin duda está redactado con claridad, frente a una frase parecida en el debate que he mencionado de septiembre de 1949, merecieron rearos a la Unión Cívica Radical. No hemos de cometer la audacia o la insolencia de reproducir aquí adecuadamente las palabras que en aquel entonces pronunció el doctor Ricardo Balbín; pero sí nos vamos a referir, por estar en relación con el tema, a las palabras

del doctor López Serrot, que en la oportunidad habló en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical. Y decía, en términos generales, que había que evitar las ambigüedades; hacía notar que cualquier término era peligroso. Aquí diríamos que hay una serie de términos peligrosos. No me voy a poner a leer en esta oportunidad —lo voy a dejar para otra— la transcripción pertinente de las palabras del doctor López Serrot; pero sí voy a decir que nuestro sector va a votar en contra de este artículo no por el espíritu o la intención que lleve sino porque en verdad muchos de estos términos pueden ser utilizados para decretar nuevas proscripciones e incluso aniquilar a los partidos políticos existentes.

Todo ello, señor presidente, a través de las expresiones y condiciones sustanciales, a mérito de las cuales se podría buscar motivo de nulidad para hacer desaparecer personerías políticas y asociaciones políticas, estrictamente democráticas, formadas de conformidad con la Constitución, que aspiran a defenderla y que aman de verdad la libertad y la democracia.

Nada más.

Sr. De Rege. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador De Rege.

Sr. De Rege. — Nuestro bloque va a pedir la sustitución del inciso b) del artículo 39. A nuestro entender nos parece que los conceptos que contiene son erróneos o no reflejan con exactitud lo que en espíritu quiere decir.

En primer lugar consideramos que en vez de decirse «bien público» debe decirse «bien común», dado que la primera expresión no siempre refleja el bien de toda la comunidad, mientras que la segunda alcanza a todos los componentes de la sociedad.

Por otra parte, comparto las observaciones del señor senador Snopek en cuanto a la referencia que hace el inciso al régimen democrático. En ninguna parte de la Constitución Nacional se utiliza la palabra «democrático». Se habla, en cambio, de la forma representativa, republicana y federal. Consideramos que en el concepto de representatividad está comprendida la esencia del régimen democrático.

También nos parece equivocada la alusión a los principios y fines de la Constitución en una forma tan ambiguamente señalada que hace difícil su determinación precisa.

Por estas razones sintéticamente expresadas vamos a proponer la sustitución del inciso b) del artículo 39, por el siguiente, en un todo de acuerdo con lo ya manifestado por nuestra bancada en la Cámara de Diputados: «Compromiso de promover el bien común, sostener las formas representativas de gobierno y reconocer y garantizar los derechos humanos y cívicos ratificados por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, sancionada por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.»

Dejo sentada así moción expresa para la sustitución del inciso.

Sr. Acuña (R. E.). — La comisión no acepta la modificación ni la sustitución.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 39 tal como ha sido despachado por la comisión, que no acepta la modificación.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observaciones se enuncian y aprueban los artículos 4º y 5º.

—Se enuncia el artículo 6º, y dice el

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Snopek.

Sr. Snopek. — Uno de los puntos fundamentales de nuestra disidencia en esta materia ha sido, precisamente, este artículo 6º, que ratifica la creación de una justicia especial o ad hoc para juzgar a las asociaciones políticas, en la que se les da una amplitud extraordinaria porque, aparte de la que ya les está atribuida por los decretos leyes anómalos de su creación —y que fueron ratificados por este Congreso—, se les da el contralor —vocablo que no es correcto— de la vigencia efectiva de los derechos, atributos, poderes, garantías y obligaciones, así como el de los registros que ésta y demás disposiciones legales reglan con respecto a los partidos, sus autoridades, candidatos, afiliados y ciudadanos en general.

Decía yo que aquí hay una especie de tiranía oficial sobre los partidos, los afiliados, los candidatos, las autoridades y hasta —como lo dice el final del artículo— sobre los ciudadanos en general, aunque no fueren ni afiliados ni candidatos ni autoridades de los partidos. Con jurisdicción tan vasta, cabe decir lógicamente que este estatuto, que pretende combatir al absolutismo o a la autocracia, cae en el absolutismo o la autocracia de un cuerpo judicial que, ciertamente, es muy difícil conciliar con la Constitución Argentina, porque se trata de una justicia nacional típica al margen de la justicia ordinaria.

Mencioné durante el debate en general que el propio radicalismo del pueblo combatió la instauración de esta justicia nacional electoral, en un memorial que presentaron sus apoderados: el doctor Alconada Aramburú, actualmente ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación; el doctor Amílcar Mercader, hoy procurador general del Tesoro, y otras personalidades eminentes del partido. Si se confiara este estatuto a la justicia federal, con recursos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como ha ocurrido tradicionalmente, habría una mayor seguridad que la que brinda este artículo.

Declaro nuevamente que esta justicia nacional electoral ha actuado para proscribir partidos políticos, creando un clima que es muy difícil que superemos. Quizá con una labor de años nos olvidemos de la discriminación realizada entre

argentinos por su modo de pensar. Hemos dicho que esta justicia ha aplicado inexorablemente, en contra de la Constitución, proscripciones no ya contra partidos y candidatos, sino contra personas determinadas y para determinados cargos; vale decir que ha actuado especializándose, hasta la mayor sutileza, en algo que no era otra cosa que la división de la familia argentina, la ruptura de la unidad nacional que proclama el preámbulo de la Constitución.

Votamos en contra de este artículo 6º porque consideramos que es uno de los más peligrosos, uno de los que pueden poner en riesgo hasta la propia estabilidad constitucional de la República. Lo decimos a conciencia, sin vacilaciones; porque si esta justicia ha de actuar aplicando la jurisprudencia que ha sentado en el proceso electoral pasado, sin lugar a dudas la estabilidad legal argentina, su ordenamiento jurídico institucional, están en peligro, y desde aquí yo doy mi voz de alerta y llamo la atención de los señores senadores sobre este mandato tan amplio que se otorga a esta justicia sin ponerle los debidos contrafrenos y garantías para establecer un orden justo. Aquí se refuerza demasiado la autoridad y se deja poco margen a la libertad. El Estado prevalece sobre los ciudadanos y sobre las asociaciones que ellos forman. Se rompe el equilibrio; entramos en desarmonía, y ello pone en serio riesgo a todo el ordenamiento jurídico argentino, incluso a la vigencia de la misma Constitución.

Sr. Salmén. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Salmén.

Sr. Salmén. — Insistimos en la observación formulada en el tratamiento en general con respecto a esta Justicia Electoral Nacional corporizada en la cámara nacional electoral.

Dijimos que, en realidad, no pertenece a la esfera del Poder Judicial sino a la del Poder Ejecutivo, y que la relación con éste no se establece por intermedio de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación sino a través del Ministerio del Interior.

Señalamos además que esta Justicia Electoral Nacional es onerosa y deficiente; que su presupuesto —y en esto damos mayor conformidad a la dependencia que hemos señalado—, que sus gastos de funcionamiento y organización están incluidos en el presupuesto general en partidas correspondientes al Ministerio del Interior y que, además, en oportunidad de los comicios del 7 de julio de 1963 la cámara nacional que corporiza esta justicia, violando la ley electoral, el mismo día de los comicios, por medio de telegramas enviados a los presidentes de mesa, anuló boletas de distintos partidos políticos provocando confusiones que determinaron que, aunque la anulación era parcial, en varias provincias se resolvió la exclusión total de las boletas de los partidos damnificados.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 6º.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se enuncia el artículo 7º.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Snopek.

Sr. Snopek. — Se trata de otra norma también delicada y peligrosa. Esta norma amplia se va a aplicar a los partidos políticos en formación.

Ayer observábamos que este artículo, si no es interpretado armónicamente con el sentido y el propósito de otras disposiciones del proyecto que consideramos, se va a prestar para que no se conceda la personería a asociaciones a las que corresponda en justicia otorgársela.

Efectivamente, no se trata de sólo el excesivo reglamentarismo que impone la misma sino también, a través de referencias que ya comentamos ayer y que se vinculan con el nombre adoptado por la asamblea, de fundación y constitución, y, así mismo, con los libros a que se refiere el artículo 44. No dudamos que es necesaria la documentación de los partidos políticos, que hay que vigilar y fiscalizar su actividad para que no tengan fondos espurios ni se encuentren al servicio de entidades extranjeras.

Cuando renegamos de todo extremismo también pensamos que los extremismos de izquierda o de derecha no son más que hijos putativos del imperialismo internacional que los ha originado.

Está bien la fiscalización sobre los fondos de los partidos y la exigencia de que se lleven libros, pero está mal que se lo considere como requisito indispensable para el funcionamiento del partido político. Incluso estamos con la fiscalización de los libros por parte de la justicia para saber si los partidos obran leal y honestamente; pero, repito, discrepamos con que los libros sean tomados como un requisito sustancial para la vigencia de los partidos. Se los debe llevar, pero no como requisito sustancial; y hay sanciones distintas para aquellos partidos que no los llevan, las que pueden ser caducidad o anulación, o bien relacionarse con el defectuoso mecanismo con que se lleven estos libros a que se refiere el artículo 44 y que se imponen como requisito para que los partidos puedan funcionar, dentro de los dos meses de obtenido el reconocimiento, a los fines de su rubricación. Aclaremos que nuestra prevención sobre este artículo como sobre los demás que venimos comentando es porque no deseamos que se utilice la ley que se discute como un arma para proscribir, es decir, como un arma de fraude electoral.

Na la más.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 7º.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se enuncian y aprueban los artículos 8º hasta 20 inclusive.

—Se enuncia el artículo 21.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Snopek.

Sr. Snopek. — Es para dejar constancia de nuestro voto por la negativa por considerar, siempre dentro del excesivo reglamentarismo, que se trata de un artículo que es absolutamente innecesario por las disposiciones claras de las leyes de enrolamiento, tanto masculino como femenino. Es una repetición inútil que tiende también a crear confusión. Tanto la libreta de enrolamiento para los varones, como la cívica para las mujeres, y por disposición de las respectivas leyes de enrolamiento, constituyen instrumentos públicos, por lo que la disposición del artículo 21 es innecesaria.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 21.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—Se enuncia el artículo 22.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Snopek.

Sr. Snopek. — Este capítulo es el más peligroso de todo el estatuto, el más grave. A este artículo del capítulo I del título III están sometidas no sólo las asociaciones que van a ir a solicitar personería política, sino las actualmente existentes. Ayer nos dedicamos con amplitud a criticar y censurar estas disposiciones contenidas en los artículos 22 y 23. Las analizamos detenidamente y demostramos cómo y de qué manera estos artículos pueden ser una celada traidora que dé muerte a las asociaciones políticas que existen y a las que puedan nacer.

Refiriéndonos exclusivamente al artículo 22, acerca de que la declaración de principios y el programa base de acción política deberán ajustarse de manera formal y real a las exigencias del artículo 3º, inciso b), y orientarán la acción del partido, expresamos a cuántas dudas se presta esta disposición.

El ajuste formal no presenta ninguna dificultad. Los partidos existentes están sin duda ampliamente ajustados a través de los estatutos diversos que han regido en este país; aun en épocas de anomalía institucional se han ceñido al artículo 3º, inciso b), porque todos indudablemente tienen en su plataforma electoral principios que conducen al bien público, que tienden a realizar la política nacional mediante un régimen democrático, representativo y republicano, y que incluso aseguran los principios y fines de la Constitución Nacional.

Más aún; esos partidos, a través de diversos estatutos han obtenido su personería con disposiciones incluso algunas más graves que éstas, pero ahora están corriendo un riesgo nuevo, se los somete a una nueva prueba. No se trata sólo de cumplir a través de la actuación formal y real que los partidos han operado en años y

años. Aquí se trata de someterse a la realidad que está en la mente de una justicia electoral cuyo pensamiento proscriptivo, discriminatorio y arbitrario conocemos perfectamente bien.

Vale decir, los partidos políticos argentinos existentes o por crearse, alguien diría que tienen que pasar por las horcas caudinas de la justicia nacional electoral. Ya han pasado una, dos, tres veces, a través de diversos estatutos; tienen que realizar el nuevo tránsito, pero ya no a través de las formas jurídicas, sino del examen de las realidades que son susceptibles de apreciación judicial por parte de esta nueva justicia especial, cuya actuación anómala, desviada, torcida, conocemos perfectamente bien.

Tenemos que oponernos de modo claro y categórico. Realizamos en este caso el examen en conjunto de los artículos 22 y 23, porque este último dice: «No cumplen con los requisitos del artículo anterior...» —vale decir se vincula directamente al 22 en esta forma— «...los partidos que por su doctrina o en su actuación —por la vía de sus organismos o candidatos— lleven a la práctica en su organización y vida interna, o en su acción exterior, la negación de los derechos humanos, la sustitución del sistema democrático, el empleo ilegal y sistemático de la fuerza y la concentración personal del poder.» Y vuelvo, para replicar estos artículos, al debate de septiembre de 1949 realizado en la Cámara de Diputados. Refiriéndose a expresiones de este tipo, el diputado López Serrot, hablando por ejemplo de términos que quizá sean más precisos, criticaba la disposición del inciso 3º del artículo 2º de la ley que en esos momentos se discutía, y tomándose de la frase «incitar a la violencia o a la alteración del orden, como forma de propaganda política», se formulaba esta interrogación: «¿Acaso no puede llegar un instante en que una fuerza política, por aquello que alguna vez se dijo en esta Cámara, que la revolución es la violencia del pueblo contra la violencia del fraude, encuentre en la incitación al desconocimiento de medidas de gobierno que sean contrarias al sentimiento cívico del país, una forma de violencia desde el punto de vista político? ¿Eso bastará dentro de este campo elástico, para juzgar qué es violencia y qué es incitación a la alteración del orden a fin de declarar fuera de la ley a una fuerza política que tiene por lo menos la valentía de decir que frente al fraude, sea en los hechos o en la situación demagógica, sólo queda el camino de la violencia del pueblo como reacción contra esa violencia del fraude?»

Yo no voy a hacer más las palabras del señor diputado López Serrot; considero que esto es ciertamente una incitación a la violencia. Estas frases envolvían realmente una alteración franca y abierta del orden público, so color de que la violencia era lícita. Frente a la violencia del fraude él autorizaba hasta el apartamiento del régimen constitucional.

Pero traigo a colación este pensamiento para demostrar la divergencia que existe entre el pensamiento radical de aquel entonces y el de hoy.

Sr. López. — La diferencia está en que antes había presos políticos y ahora no.

Sr. Snopek. — Ahora voy a entrar a una cosa seria y más grave...

Sr. López. — Eso que usted dijo es lo más grave.

Sr. Presidente. — La Presidencia ruega al señor senador López que no interrumpa al orador.

Sr. Snopek. — ...siempre dentro del espíritu del artículo que estamos tratando.

En esa oportunidad intervino, con palabras claras y precisas, en representación del radicalismo, el señor diputado Santander, quien incluso entendía que debía legalizarse la actuación del Partido Comunista. Más aún: exigía que eso se dispusiera de un modo expreso dentro de la ley. Llegaba a considerar el señor diputado Santander que incluso mientras el Partido Comunista no revelara en los hechos una actuación contraria su actividad debía ser permitida. Indudablemente no coincido con el criterio del señor diputado Santander, pero voy a leer las palabras que pronunciara en ese debate, sin ninguna transformación, para que se vea el criterio amplio que tenía el sector radical en aquel entonces.

Sr. Aguiar Vázquez. — Lo sigue teniendo, señor senador.

Sr. Snopek. — «Evidentemente, considero que sin mucha suspicacia se puede ver que el inciso 2º va directamente dirigido contra una de las fuerzas políticas que tiene personería nacional e internacional. Me refiero al Partido Comunista, que actualmente está reconocido por los poderes públicos argentinos. Si así fuera, creo que los señores diputados deben ser precisos y categóricos, si se refieren a la prohibición de la actividad política libre del Partido Comunista.»

Después de decir esto agregaba el señor diputado Santander que si se pensaba eso debían señalarlo sin vacilaciones y aceptar la responsabilidad de ese hecho. Y finalizaba con esta frase: «Nosotros militamos en un partido nacional perfectamente definido y no tenemos vinculación ideológica alguna con el comunismo, aun admitiendo y reconociendo su concepción científica. Como somos partidarios, y lo hemos demostrado en la práctica, de respetar todas las ideas y los principios, nos parece que debe dejársele actuar para que juegue dentro del movimiento regular de las instituciones, hasta que no se demuestre que como fuerza política va en contra de los intereses de la Nación.»

He hecho la transcripción no para realizar una defensa del Partido Comunista, lo que está muy lejos de mi ánimo, sino para marcar el espíritu extraordinariamente liberal, abierto y claro, del radicalismo como oposición, lo que por cierto no

se confronta o no tiene la armonía necesaria con la disposición del artículo 23 que, como he dicho, se presta a las más diversas y extraordinarias interpretaciones. En la sesión de ayer poníamos el caso...

Sr. Acuña (R. E.). — ¿Me permite una interrupción, señor senador, con la autorización de la Presidencia?

Sr. Snopek. — Sí, señor senador.

Sr. Acuña (R. E.). — Expresamente usted se ha referido al artículo 23. Yo le pregunto, ¿qué dispositivos de dicho artículo determinan la proscripción del Partido Comunista?

Sr. Snopek. — No está en mi interés ponerlo en discusión...

Sr. Acuña (R. E.). — Y entonces, ¿a qué viene ese argumento, señor senador?

Sr. Snopek. — Porque es algo más peligroso, señor senador; ya que con este artículo pueden proscribirse todos los partidos políticos actuantes en la República Argentina. A tal absurdo podrá llegarse porque este artículo hace ver las cosas de acuerdo con el cristal con que se mire, citando la frase del poeta. Fijense, señor senador y señor presidente, si los términos son o no elásticos. No se trata solamente de la actuación del partido político como persona jurídica, sino de la de cualquier candidato por insignificante que sea...

Sr. Acuña (R. E.). — Pero esa es una valoración defectuosa del señor senador, es caprichosa.

Sr. Snopek. — Surge claramente del texto de la ley.

Sr. Fassi. — Los jueces son inteligentes, señor senador. Además tienen el acuerdo del Senado, y a un juez tan torpe este cuerpo no le hubiese prestado el acuerdo.

Sr. Presidente. — La Presidencia ruega no interrumpir al orador que está en uso de la palabra, y que es el señor senador Snopek.

Sr. Fassi. — Es que no tenemos jueces torpes, señor senador. Tenemos jueces inteligentes. Han pasado por la facultad, han estudiado...

Sr. Presidente. — No se está discutiendo eso, señor senador. Eso se discutirá mañana.

Sr. Fassi. — ...son profesionales que conocen derecho, señor presidente.

Sr. Snopek. — Señor presidente: a mí me place que se hable mucho de los jueces, y me agrada que haya jueces sabios. Pero yo, más que jueces sabios, deseo para mi patria jueces prudentes y especialmente probos.

Sr. López. — Y breves.

Sr. Snopek. — En cuanto a la alusión que acabo de escuchar, seguramente va a figurar, como todas, en la versión taquigráfica correspondiente...

Sr. Fassi. — Si no la borran, señor senador.

Sr. Snopek. — ...a pesar de estar prohibidas por el reglamento.

Por lo tanto voy a formular moción de orden en el sentido de que se me respete en el uso de la palabra.

Sr. Presidente. — Ruego a los señores senadores que no interrumpan al señor orador que está en el uso de la palabra.

Sr. Snopek. — Voy a solicitar que se ponga inmediatamente a votación, porque soy muy respetuoso de los oradores que están en el uso de la palabra, y ninguno de ellos puede decir que jamás los haya interrumpido. Los invito a que me demuestren lo contrario. A mí, en cambio, me interrumpen constantemente.

Sr. López. — Es que usted habla mucho, señor senador.

Sr. Snopek. — Hay que poner en algún momento una valla, un freno a esto, que por otra parte está contemplado en el reglamento. En consecuencia, señor presidente, mociono concretamente en el sentido de que todas las interrupciones que se realicen fuera del reglamento no figuren en el Diario de Sesiones. No es nada más que el acatamiento pleno al reglamento. Pido que se ponga a votación.

Sr. Presidente. — La Presidencia le aclara, señor senador, que se aplicará la reglamentación tal como corresponde. Por lo tanto ruego a los señores senadores no interrumpir al orador, porque no se admitirán las interrupciones, ni se van a tolerar. Será respetado íntegramente en el uso de la palabra en la misma forma que lo han sido todos los señores senadores. Esta última interrupción ha sido consentida por el señor senador Snopek ante un pedido formulado por el señor senador Acuña, y la misma ha tenido luego derivaciones ilimitadas. Por lo tanto, la Presidencia no ha de consentir ninguna otra interrupción y aplicará las disposiciones reglamentarias en cuanto a interrupciones no autorizadas por el orador.

Sr. Snopek. — Agradezco, señor presidente, este respeto en el uso de la palabra, porque sin duda no haríamos mérito al espíritu de este estatuto, que precisamente quiere el libre juego democrático. El artículo que está en consideración expresa: «No cumplen con los requisitos del artículo anterior los partidos que por su doctrina o en su actuación —por la vía de sus organismos o candidatos—...» Vale decir que cualquier candidato puede dar lugar a caer en el Index que establece este artículo en la proscripción que ésta merece o no dentro del espíritu de esta norma legal lleven a la práctica, en su organización y vida interna o en su acción exterior, la negación de los derechos humanos, la sustitución de la forma democrática, el empleo ilegal y sistemático de la fuerza y la concentración personal del poder.

Cuando discutíamos en general me trajo singular placer la aclaración hecha por el señor senador por Córdoba cuando dijo que la concentración personal del poder se refería a la concentración personal del poder que prohíbe

la Constitución Nacional, es decir, la concentración constitucionalmente ilegítima. El señor senador por Córdoba puntualizó con claridad esa distinción porque de otra manera ocurriría que esto de concentración personal del poder puede prestarse a las máximas y más tremendas arbitrariedades. Por eso yo señalaba que la Constitución Nacional había concentrado el poder al crear un Poder Ejecutivo unipersonal y darle las más amplias facultades —el Poder Ejecutivo fuerte de que hablaba Alberdi— y que figuran a través de las distintas disposiciones del artículo 86 de la Constitución Nacional. Esto de la concentración personal de poder puede conducir a las más aviesas interpretaciones. Se puede decir, por ejemplo, lo que sería una barbaridad, en mi concepto, por ejemplo que la anulación de los contratos petroleros implicaba una concentración personal del Poder Ejecutivo porque significaba coartarle la libertad a las compañías extranjeras y que el Estado aseguraba el monopolio del petróleo. El país ha aplaudido en general —lo hemos dicho aquí— esa medida, pero puede haber un juez interesado. Los jueces, se ha dicho, son fruto de un mundo, de una hora, de un tiempo; no son seres ideales, perfectos; no está dada en ellos la teoría pura, la doctrina pura, la justicia pura. Aristóteles pensaba así, pero era un filósofo, que ir al juez era ir a la justicia misma, pero para eso hay que pensar en jueces abstraídos del mundo y de la vida, sin ninguna pasión, absolutamente imparciales, con una independencia total, que interpreten la ley conforme a su espíritu, pero eso no acaece ni ha acaecido en la Argentina.

Se ha hablado de la justicia electoral, a la que le ha prestado su acuerdo el Senado. Este garantiza con su acuerdo un mínimo de dignidad, pero no puede garantizar con su acuerdo la infalibilidad de los jueces ni menos convertir a los seres humanos en dioses.

No hay ningún estatuto de esa naturaleza. Por eso el legislador, al dar la ley, tiene que tener la prudencia y la cautela necesarias de no dar con sus términos lugar o motivos para que se produzcan injusticias. En eso estamos.

Estos artículos 22 y 23 del estatuto son los que se prestan a que esta Justicia Electoral Nacional, a la que se le da una verdadera dictadura y tiranía sobre los partidos políticos argentinos, no sólo pueda establecer discriminaciones y proscripciones sino hasta liquidar los partidos políticos existentes y anular la libertad política argentina.

Hace un momento decía que la libertad política es la base de todas las libertades. Por este camino, el predominio de la libertad podría anular toda suerte de libertades argentinas; el propio sistema democrático que se quiere resguardar con estas instituciones desfallecería y fenecería inexorablemente; la Constitución Argentina dejaría de regir; más aún cuando este artículo no tiene una referencia expresa a la Constitución y esa Justicia Electoral, que existe

actualmente y que ha actuado en las elecciones pasadas, ya hemos dicho que no se sentía obligada a acatar la Carta Magna, lo que era de por sí una enormidad. Por muy sabios que sean los jueces, yo no puedo aceptar el crimen jurídico tremendo que implica el desconocimiento de la Constitución, ni puedo perdonar ese pecado y esa falta porque es una falta imperdonable en un juez. Ya desde antiguo se conocía tal acción como delito de prevaricato.

Por eso, estas disposiciones confusas, que pueden dar lugar a proscripciones políticas injustas y arbitrarias, que pueden sembrar la división argentina e incluso los fermentos o las semillas necesarias para que en vez de existir la paz exista la guerra y la lucha civil argentina, no pueden contar jamás con mi voto. A conciencia no las votaré jamás.

Nuestro sector va a votar en contra, dejando constancia de que lo hacemos en repudio a toda forma de absolutismo y porque amamos de verdad la democracia y la libertad, la auténtica democracia y la auténtica libertad.

Sr. De Rege. — Pido la palabra.

Nuestro bloque va a votar en contra del artículo 22. Entendemos que este artículo deja en el estatuto la posibilidad de que pueda usarse de un instrumento de proscripción. Sé que no es esa la intención, abierta ni oculta, con que está redactado el artículo, pero deja un resquicio de posibilidad de proscripción, que consideramos, también, no se usará en un futuro inmediato pero que sí puede ser utilizado con el andar del tiempo contra cualquier fuerza política.

Por otra parte, los recaudos que se toman en este artículo ya están cubiertos con las exigencias del artículo 39. Luego, no se ve razón valdiera alguna para que pueda este artículo subsistir.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 22.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—Se enuncia el artículo 23, y dice el

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Es para hacer extensiva mi exposición anterior a este artículo. He querido, precisamente, por razones de brevedad, comentarlos conjuntamente.

Formulamos nuestra reserva y nuestro formal y categórico rechazo a esta disposición que, declaramos, en vez de cerrar las heridas que laceran el ser nacional, no sólo las pueden abrir, sino ocasionar catástrofes políticas mayores.

Sr. Bauducco. — ¡Es la cuarta vez que repite lo mismo el señor senador!

Sr. López. — Lo dijo catorce veces.

Sr. Presidente. — Ese derecho no está prohibido, señor senador.

Sr. Blanco. — Pero es de mal gusto.

Sr. Gelsi. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Gelsi.

Sr. Gelsi. — Voy a proponer en el artículo 23 el siguiente agregado: «En ningún caso el reconocimiento a un partido político podrá ser negado invocando hechos anteriores a la vigencia de esta ley.»

Sr. Acuña (R. E.). — La comisión no acepta.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 23 del dictamen de la comisión.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—Se enuncia el artículo 24.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Vamos a tener que hablar en lenguaje telegráfico, señor presidente, y decir que nos remitimos a la discusión en general, particularmente por las observaciones que formulamos en el mismo y en razón de que este artículo 24 tiene que ser necesariamente concordado con el artículo 35, inciso 1). Insistimos en las reservas que dejamos sentadas en la sesión de ayer en cuanto, a nuestro criterio, los órganos de control y disciplinarios de los partidos pueden ser objeto de elección indirecta, vale decir que no es forzoso que surjan de la elección directa de los afiliados, sino que pueden ser designados por los organismos deliberativos o ejecutivos. Ese es nuestro modo de ver, siguiendo al respecto las disposiciones de la Constitución Argentina en lo relativo a la designación de los miembros del Poder Judicial de la Nación, criterio sustentado también por democracias avanzadas en el mundo, como es la norteamericana.

Sr. Presidente. — Si ningún otro señor senador hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 24.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se enuncian y aprueban los artículos 25 hasta 33.

—Se enuncia el artículo 34.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sólo deseo dejar constancia en el Diario de Sesiones del voto negativo de nuestro sector a todo el capítulo que se cierra con este artículo por su excesivo reglamentarismo; porque ciertas disposiciones como las del artículo 29, inciso c), pueden dar lugar a dificultades.

Nada más, señor presidente, en homenaje a la brevedad.

Sr. Presidente. — Si ningún otro señor senador hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 34.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — En consideración en particular el artículo 35.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

El artículo 35, que se encuentra a consideración, se relaciona con la reserva que por nuestra parte hemos dejado formulada al artículo 24. La mantenemos en esta oportunidad, dejando

perfectamente establecido que entendemos que los órganos de fiscalización y control de los partidos políticos pueden ser elegidos por los organismos ejecutivos y deliberativos, es decir, que no es necesario que respecto a ellos se practiquen las elecciones periódicas de que habla este artículo. Repetimos que formulamos esta observación precisamente siguiendo las líneas de la Constitución Nacional en cuanto trata del Poder Judicial de la Nación, que entendemos es dentro de nuestro sistema institucional el órgano de control y fiscalización de los otros poderes del Estado.

Sr. Presidente. — Si ningún otro señor senador hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 35.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observaciones se enuncian y aprueban los artículos 36, 37 y 38.

—Se enuncia el artículo 39.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

No todas han de ser críticas. Aquí vamos a elogiar una disposición del proyecto que se encuentra en consideración, contenida en el inciso e) de este artículo, que tiende a establecer un principio de moralización en los partidos políticos, y que precisamente está refirmado por la crítica o censura de carácter general que realizamos a este estatuto. Es decir que estimo que dentro de la norma de la presente disposición está incluido el principio de moralización interna para todos los partidos políticos existentes, finalidad plausible y que cuenta con nuestro más decidido y cálido apoyo.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 39.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se enuncia el artículo 40.

Sr. Snopek. — Señor presidente: siempre en lenguaje telegráfico a fin de no cansar a mis colegas y de que no se me critique la largueza, he de decir que estimo que este artículo debe ser interpretado en función de la documentación electoral pertinente. Es decir, que esta disposición no quita la fuerza de prueba de los instrumentos que se han creado por otras leyes, particularmente las de enrolamiento masculino y femenino. Es decir que esta disposición es una norma subsidiaria o complementaria de aquellas leyes que son permanentes en la Nación, cuyas bondades han sido experimentadas a través de largos años.

Esta aclaración resulta necesaria porque, de otra manera, manifestaríamos nuestra total y absoluta disconformidad con este artículo.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 40.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se enuncia el artículo 41.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Se trata de otra disposición igualmente elogiabile y que tiende a la moralización interna de los partidos. Por eso no vamos a formular observación de fondo en cuanto a ella. Lo que sí deseamos es que este artículo, como todos los demás del instituto, sea correctamente aplicado y honestamente interpretado.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 41.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—Sin observaciones se enuncian y aprueban los artículos 42 y 43.

—Se enuncia el artículo 44.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

He de repetir también en forma breve las observaciones que formulamos respecto a los libros y documentación interna de los partidos.

Entendemos que los libros son necesarios e indispensables para toda organización correcta, pero consideramos, y en este sentido queremos dejar perfectamente aclarada nuestra opinión, que el defecto de que pueda adolecer la registración de estos libros y que no se cometa de mala fe, que no lleve implícito un fraude en la documentación electoral, no puede ni debe determinar jamás la cancelación de los partidos políticos u ocasionar medidas extremas. En todo caso, las facultades de los jueces deberán llegar a la corrección de esos defectos y salvo en caso de reincidencia o de extrema gravedad es que se podrá, en materia de documentación electoral, que es de lo que trata este artículo 44, disponerse sanciones contra los partidos políticos. Considero pertinente esta aclaración porque en provincias como la nuestra, en que hay pocos profesionales en materia contable y también jurídica, en que especialmente les es difícil a los partidos de oposición contratar profesionales de esa categoría, artículos como éstos pueden prestarse a que se apliquen sanciones indebidas o injustas a los partidos. Y es preciso evitar toda suerte de arbitrariedades y abusos que no creo hayan estado en el espíritu de la sanción de la Cámara de Diputados ni, por supuesto, han de estar en el de este Senado al aprobar este artículo.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 44.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—Se enuncian y aprueban los artículos 45 a 49, inclusive.

—Se enuncia el artículo 50.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Snopek.

Sr. Snopek. — Hacemos extensivas a este artículo las observaciones que hemos formulado en general respecto a la justicia nacional electoral. En este aspecto, cabe referirse a la jurisdicción de la Cámara Electoral y de los juzga-

dos de distrito en forma extraordinaria, que como he dicho pueden ser objeto de interpretaciones peligrosas. Nótese que en los dos apartados que componen este artículo se le da a la justicia electoral un alcance que pocas veces se ha visto en otros estatutos de partidos políticos, por tratarse de atribuciones demasiado amplias y que justifican lo de dictadura judicial a que hice mención hace un momento. En consecuencia, no resulta raro que me refiera a este problema, en especial en lo relativo al régimen de los registros.

A ese respecto puedo hablar con la experiencia de un juez electoral de muchos años. Disposiciones como éstas tienen que ser aplicadas por los jueces con toda ponderación y prudencia, para emplear los términos de la Corte Suprema. No siempre los partidos pueden ejercer vigilancia muy estricta sobre sus comités y, para no hablar de ellos, digamos sobre sus sedes centrales. Artículos como éstos pueden ocasionar que el hurto mal intencionado de los registros de adherentes de un partido político origine la cancelación de dicho partido. Ello puede ocurrir en un atentado criminal contra un partido político en que se los hiciera desaparecer; la quema común, el grupo criminal, de delinquentes, pueda dar lugar a que un partido político frente a estas disposiciones sea colocado en una situación difícil.

Indudablemente, la reglamentación ha sido buena en su fondo, pero no ha podido ni puede prever todos los supuestos, como el caso fortuito o fuerza mayor, que originan situaciones de excepción. Quiero dejar en claro, entonces, que el espíritu de este artículo al otorgar tan extraordinarias facultades a la justicia electoral nacional, o sea a la Cámara Nacional Electoral y juzgados de distrito, es para que sean aplicadas con justicia, contemplando los casos de excepción y aplicando los principios del derecho común, con el objeto de que realicen una verdadera justicia o, si se quiere, para afianzar la justicia, como lo establece el Preámbulo de la Constitución. Nada más.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 50.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación se enuncian y aprueban los artículos 51 y 52.

—Se enuncia el artículo 53.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Snopek.

Sr. Snopek. — A esta altura del debate no vamos a hacer nada más que la crítica de la excesiva reglamentación del artículo 53, sin formular una en particular, en homenaje a la brevedad, y dejar constancia también del voto por la negativa de nuestro sector, en este artículo. Nada más.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 53.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación se enuncian y aprueban los artículos 54 a 61 inclusive.

—Se enuncia el artículo 62.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Snopek.

Sr. Snopek. — Es para dejar constancia de que el capítulo que se ha votado lo hemos hecho por la negativa, también por su excesiva reglamentación.

Sr. Presidente. — Se dejará constancia. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 62.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se enuncia el artículo 63.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Snopek.

Sr. Snopek. — Se trata de un artículo extraordinariamente delicado. Prevé las causas de caducidad de la personería de los partidos políticos, y entre ellas está la del inciso b), que establece la caducidad, digamos, casi por ministerio de la ley, por virtud de la abstención electoral. Me remito a la larga lucha del radicalismo para fundar mi voto por la negativa y, en homenaje a la brevedad, a las palabras pronunciadas por representantes de la Unión Cívica Radical, a este respecto, en el debate del 28 y 29 de septiembre de 1949, frente a una disposición de este tipo.

Me limito a hacer esta observación para dejar fundado nuestro voto por la negativa, sin que esto importe tampoco aceptar la disposición del inciso d) del artículo 63, que en nuestro concepto es también peligrosa para la interpretación.

Sr. Ghiglione. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Ghiglione.

Sr. Ghiglione. — Voy a votar favorablemente este artículo, con la serena convicción de que estamos en la ruta de nuestra consecuencia partidaria, cumpliendo con los principios que la Unión Cívica Radical siempre defendió. Nada más. (*¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 63.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se enuncia el artículo 64, y dice el

Sr. Snopek. — Este también es otro artículo peligroso, señor presidente. Por eso, nosotros vamos a dejar constancia de nuestro voto por la negativa.

Quiero aclarar, para que no se preste tampoco a interpretaciones erróneas, que por nuestra parte aplaudimos sinceramente el propósito del inciso d) del artículo 64, que indudablemente tiende a reprimir una de las formas de violencia dentro de los partidos políticos, a darle una organización absolutista o autoritaria. Pero bien entendido, señor presidente, que esta disposición del inciso d) de ningún modo puede obstar a los estudios especializados que puedan realizar los respectivos partidos políticos en lo que se refiere a la defensa nacional.

Vale decir que nuestro sector estima que los partidos políticos deben tener conocimiento de todos los asuntos a que se refiere el gobierno, incluso la milicia. Consideramos —y en torno de esto deseamos realizar una aclaración— que la más firme base de sustentación del poder está en la subordinación del poder militar a la autoridad civil. Sin ello es imposible lograr la seguridad jurídica.

Dejo constancia, pues, de que en nuestro sentir este inciso d) persigue una finalidad plausible y debe ser interpretado correctamente en el sentido de que esto no importa que los partidos políticos tengan sus consejos de asesoramiento en materia de defensa nacional, como corresponde a funciones de adoctrinamiento o asesoramiento en todo partido político; que lo que se proscribía con esto es el empleo de las fuerzas, de milicias armadas dentro de los partidos políticos, que dan lugar a roces y que generan la violencia.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 64.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se enuncia el artículo 65, y dice el

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Deseo formular una observación a este artículo. Es demasiado grave la cancelación de la personería de un partido político como para que el estatuto no haya previsto en forma expresa la apelación ante el más alto tribunal de la Nación, vale decir, la viabilidad del recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La observación es necesaria pues la Corte Suprema tiene declarado que a ella no le es dado revisar los fallos en materia electoral o en materia política, y la no concesión por ley de ese recurso extraordinario priva a los partidos políticos, existentes o a crearse, de una de las más seguras garantías, que es la permanencia de este libro simplemente sacrosanto que es la Constitución Nacional. Nada más.

Sr. Fassi. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fassi.

Sr. Fassi. — Deseo dejar constancia, expresando el sentir de la mayoría de la comisión, de que hay una diferencia radical entre el pensamiento de los integrantes de la misma y las

expresiones del señor senador Snopek, de manera que ellas no deben servir para la interpretación de la ley que estamos considerando. Lo expuesto se pone en evidencia, en esta cuestión, porque el recurso extraordinario no necesita ser mentado en la presente ley: él nace de la violación de la Constitución y se apoya en el artículo 14 de la ley 48, y no es necesario que en ninguna ley de carácter formal se establezca la posibilidad de ese recurso, porque tiene otra vía que priva sobre todas las disposiciones procesales en la materia.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Snopek.

Sr. Snopek. — Para realizar la siguiente aclaración, señor presidente. La Corte Suprema tiene sentada jurisprudencia, podríamos llamar constante y uniforme, de que no le es dado intervenir en cuestiones de índole electoral o política, y ha rechazado sistemáticamente el recurso extraordinario en esta materia. La no concesión por ley, insisto, priva en este caso de una segura garantía. Y aclaro que ésta no sólo priva a los partidos políticos del beneficio de la ley, sino también de lo que dispensa la Constitución, más cuando se otorga la plena jurisdicción sobre esta materia a una Cámara Nacional Electoral, que no tiene propiamente las características de los demás tribunales judiciales de la Nación, sino características especiales, muy propias y muy determinadas. Vale decir, señor presidente, que esto confirma lo que he venido diciendo a través de todo este debate. La aclaración realizada por el bloque de la mayoría sienta más aún los términos de incertidumbre, de duda, de confusión, que por nuestra parte hemos venido apuntando a través de todo este debate. Que ella cargue con la responsabilidad de sancionar este peligroso instrumento, que quedará para la historia.

Sr. Fassi. — La cargaremos, señor senador, íntegramente.

Sr. Presidente. — La Presidencia recuerda a los señores senadores que no pueden hacer uso de la palabra sin solicitarla previamente.

Se va a votar el artículo 65.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Igualmente se aprueban los artículos 66 hasta 73 inclusive.

—Al enunciarse el artículo 74, dice el

Sr. Fernández. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. — Es a los efectos de solicitar una aclaración a la comisión. El artículo 74 dispone: «El partido en constitución que solicitare el reconocimiento de su personalidad deberá acreditar la autenticidad de las firmas y demás documentación mediante certificación de escribano o funcionario público competente.» Y el

artículo 29, al establecer disposiciones sobre la filiación, en el inciso c), estatuye la presentación por cuadruplicado de la ficha solicitud que contenga: nombre y domicilio, etcétera, y la firma o impresión digital, cuya autenticidad deberá ser certificada en forma fehaciente por el funcionario público competente o por la autoridad partidaria que determinen los organismos ejecutivos, etcétera.

Es decir, que pediría esta aclaración a la comisión. Estimo —y es mi opinión personal, por supuesto— que, por el artículo 29, a la autoridad partidaria que determinen los organismos ejecutivos se le asignaría una calidad de certificante por ley, y al asignársele tal competencia de funcionario público —a eso quería llegar— podría coordinarse entonces la disposición del artículo 29 con la del 74, porque ésta restringiría en cierta forma las facultades a los efectos de la certificación de documentos, que son en realidad los mismos de que habla el artículo 29. No sé si he aclarado perfectamente.

Sr. Castiglione. — Existe por la ley la ratificación, y ésta es la constitución de partidos nuevos.

Sr. Presidente. — Son dos etapas distintas señor senador.

Sr. Fassi. — A mi entender, señor presidente, el artículo 29 se refiere concretamente a las fichas y establece cómo éstas se autentican, y como lo particular siempre prevalece sobre lo general, mientras el artículo 74 da normas generales de autenticación, tendremos que llegar a la conclusión de que en cuanto a las fichas rige el artículo 29, inciso c), y con respecto al resto de la documentación que es necesario presentar ante la justicia electoral, rige el artículo 74.

Sr. Fernández. — Muchas gracias, señor senador.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 74.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación se enuncian y aprueban los artículos 75 hasta 84.

—Al enunciarse el artículo 85, dice el

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Snopek.

Sr. Snopek. — Indudablemente, la finalidad perseguida por este artículo ha sido derogar las diversas disposiciones de carácter discriminatorio y proscriptivas que están rigiendo en el país. Pero faltan en este artículo disposiciones de decretos, entre ellos aquellos que ordenan a los representantes del ministerio fiscal oponerse al otorgamiento de la personería política al Partido Justicialista.

Desearía que la comisión me aclarara si el sentido de este artículo es también dejar derogadas esas disposiciones discriminatorias actualmente existentes. Esa duda mía surge del si-

guiente hecho: la derogación de las leyes puede ser hecha de un modo expreso o implícito mediante la aplicación de todo un estatuto nuevo. Al instituir un nuevo régimen quedan de hecho fenecidas todas las disposiciones que de cualquier modo se opongan al mismo.

Es decir que solicito expresamente de la comisión me aclare si este estatuto que se está votando establece un nuevo ordenamiento para los partidos políticos, que deroga todos los anteriores e incluso las disposiciones discriminatorias que mandan, disponen u ordenan a los fiscales que en todos los casos se opongan al otorgamiento de personería al Partido Justicialista.

Sr. Acuña (R. E.). — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Acuña.

Sr. Acuña (R. E.). — De acuerdo con el texto expreso del artículo 85, la comisión entiende que la ley deroga toda disposición anterior que se oponga a la personería del Partido Justicialista. Quedan derogadas.

Sr. Fassi. — Siempre que el Partido Justicialista se ajuste a las normas de esta ley.

Sr. Snopek. — Por supuesto.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 85.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se enuncia y aprueba el artículo 86.

—Al enunciarse el artículo 87, dice el

Sr. Snopek. — Este artículo, señor presidente, no podemos dejarlo pasar por alto. Estamos en este Senado representando a partidos políticos que existen y han conseguido su reconocimiento. La primera parte de esta disposición reconoce la existencia de esos partidos, pero la segunda parte les obliga inexorablemente a que en el plazo de un año acrediten nuevamente ante la justicia electoral nacional todas las condiciones a que se refieren los títulos I, III, IV y V. Vale decir, señor presidente, que aun a los humildes partidos de provincia, nacidos al amparo del noble y grande federalismo argentino, les cabe el cumplimiento de este requisito, pues deben ajustarse *in totum* a los títulos ya señalados. O sea que estos partidos tienen que renacer antes de un año sin que se les reconozcan los reconocimientos anteriores logrados bajo estatutos menos liberales, más duros en ciertos aspectos; es decir, van a quedar deshechos por la aplicación estricta de la segunda parte de este artículo 87.

Señor presidente: no deseamos agregar un comentario más, y queremos expresar que esto puede constituir un serio atentado a la seguridad jurídica de los partidos políticos existentes, ocasionando, por ende, una seria distorsión en la vida política argentina. Por ello, y siempre en el entendimiento de que la mayoría no acepta modificaciones a este estatuto, nosotros de-

jamos formulado nuestro más franco y sincero rechazo a la segunda parte de este artículo 87, pidiendo a los señores senadores que mediten y reflexionen, y que traten —dentro del período ordinario de sesiones de 1965, en el nuevo año que está por nacer— de modificar esta disposición en aras de la tranquilidad política de la República y para crear un clima necesario para la reconstrucción nacional.

Sr. Gamond. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Gamond.

Sr. Gamond. — Frente a las manifestaciones que acaba de hacer el señor senador por Jujuy, deseo dejar constancia de que nuestro partido, al votar como lo está haciendo, por la sanción de este estatuto, está cumpliendo con toda lealtad con la palabra empeñada en la Cámara de Diputados, frente al propio partido que representa el señor senador Snopek, y que lo estamos haciendo con una lealtad que no tiene reciprocidad.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Snopek.

Sr. Snopek. — Deseo hacer una breve aclaración sin intención de polémica.

La existencia de dos Cámaras en el Congreso Nacional implica, precisamente, que una es revisora de la otra; en la diversidad de opiniones entre ambas hay solamente un criterio de perfección. Toda la historia institucional de los Estados Unidos, cuyo modelo hemos seguido, indica que la Cámara revisora debe cumplir esa misión propia como es la de examinar nuevamente lo que la otra ha decidido. En este caso esta actitud nuestra indica algo más ante la opinión pública del país: que no es verdad que los representantes del justicialismo obedecemos órdenes únicas, porque nuestra disidencia en este caso con nuestro sector en la Cámara de Diputados ha quedado de manifiesto a todo lo largo de este debate, en que precisamente hemos querido marcarla con toda profundidad para dar cuenta de que somos más que nada argentinos, amantes de la democracia y de la libertad. Por eso los senadores hemos decidido mantener en este caso nuestra libertad de criterio, y lo hemos venido manifestando reiteradamente a través de nuestra oposición casi sistemática a este estatuto o ley orgánica de los partidos políticos.

Sr. Gamond. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Gamond.

Sr. Gamond. — Es para dejar nuevamente constancia de que los compromisos de partidos políticos no se hacen para una Cámara y que los argumentos dialécticos usados por el señor senador preopinante para no cumplir en esta Cámara el compromiso político contraído en la otra no tienen valor para la opinión pública y significan sí un serio desmedro para el futuro político del país.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. López. — ¿Qué es esto, señor presidente, un partido de ping-pong?

Sr. Presidente. — Son interrupciones y aclaraciones que se formulan los señores senadores, y no un partido. Este es el Estatuto de los Partidos Políticos. *(Risas.)*

Sr. López. — Es que el señor senador Snopek solicitó expresamente que no se le interrumpiera, de manera que no corresponde que él lo haga.

Sr. Presidente. — No, señor senador, son aclaraciones que se formulan recíprocamente dos señores senadores que son perfectamente reglamentarias.

Sr. Snopek. — Deseo ante todo dejar constancia de que el debate en particular es libre, conforme al reglamento de la Cámara.

Sr. López. — No hago una cuestión reglamentaria sino que hago notar que usted pidió que no se le interrumpiera.

Sr. Presidente. — Está en el uso de la palabra el señor senador Snopek.

Sr. Snopek. — Deseaba hacer esta aclaración muy fundamental: esa fuerza política que se llama justicialismo no está organizada hasta este momento en un partido político que se exprese por medio de su bloque de diputados nacionales. No ha existido, pues, un compromiso de partido a partido. Bajo ningún concepto podemos aceptarlo. A través de esto dejamos aclarado también que no estamos violando la palabra que pudieron haber empeñado los señores diputados nacionales y cuyo alcance y sentido desconozco personalmente en absoluto.

Sr. Abdala (F.). — No lo han consultado.

Sr. Snopek. — No estoy informado de ello, pero dejo aclarado, sí, en forma terminante que nuestro sector en la Cámara de Senadores se denomina precisamente Movimientos Populares Provinciales en razón de su origen proveniente de distintos partidos políticos.

Deseamos, sí, que este estatuto permita la organización del Partido Justicialista, que es una realidad argentina, y que se le permita actuar legalmente, con sus propias autoridades reconocidas dentro de la organización institucional en la República. Entonces podrán cobrar plena realidad las palabras del señor senador por Córdoba. Mientras tanto, dejamos constancia de nuestra lealtad y honestidad en el cumplimiento de la palabra empeñada, que jamás violaremos.

No hemos contraído personalmente ningún compromiso y estamos haciendo salvedades y poniendo nuestra inquietud y acción al servicio de la República y por su salud moral y material.

Sr. Gamond. — Pido la palabra.

Señor presidente: voy a molestar por última vez a la Cámara. Y lo voy a hacer para dejar constancia de que este instrumento jurídico que estamos dando al país no es el resultado de una imposición de nuestro partido, sino la consecuencia de una comunidad de pensamiento concretada en la Cámara de Diputados por los legisladores de la Unión Cívica Radical del Pue-

blo con los del sector que representa el señor senador Snopek, es decir, con los representantes de los Movimientos Populares Provinciales, que allá son diputados y aquí senadores, algunos pertenecientes a la misma provincia. De modo que no buscamos imponer esta ley a los Movimientos Populares Provinciales; ella resulta del libre juego de las voluntades, expresadas en la Cámara de Diputados de la Nación.

Por eso, señor presidente, nos sorprende la falta de generosidad con que el senador Snopek la ha juzgado en esta Cámara y creemos que él no ha comprendido los altos y patrióticos sentimientos que nos han animado desde el comienzo de la consideración de esta ley.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 87.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se enuncia el artículo 88.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Señor presidente: aunque sean variaciones sobre el mismo tema y con referencia al artículo en consideración, en su inciso 1º, que se refiere a los partidos preexistentes, diremos que en la Cámara de Diputados el bloque justicialista formuló una serie de aclaraciones a este despacho, que no fueron aceptadas por la mayoría. Y voy a agregar más. No temo que se me tilde de contradictorio. A través de las contradicciones se hacen las grandes verdades. ¡Parece increíble decirlo!

No voy a traer en esta oportunidad nuevamente al recuerdo las parábolas del Evangelio; me bastaría recordar sólo la de la cizaña y el trigo. Este artículo ya lo critiqué en la discusión en general y dije: «¡Qué cosa extraordinaria!» A estos fines se consideran como partidos preexistentes los que tienen en trámite la personería cumpliendo este estatuto, colocándolos así en paridad de condiciones con los que ya no sólo tienen otorgada su personería bajo varios estatutos anteriores, sino una larga y vieja actuación.

Marqué la desigualdad y en esta circunstancia vuelvo a hacerlo. Considero que aun en el orden familiar el marcarse los defectos entre hermanos no es dañoso; menos lo ha de ser para toda la familia argentina; más cuando he criticado en general la ambigüedad de estos términos, y a título personal, no deseo dejar pasar por alto porque en el informe de la mayoría se trajeron a colación las palabras del señor diputado Serú García, quien consideró que este estatuto era un paso adelante en la legislación de los partidos políticos argentinos.

Pienso que si esta ley es aplicada erróneamente, no sólo va a significar un paso atrás sino que puede retrotraernos a la barbarie política, porque no de otra forma puede titularse a la discriminación entre los argentinos y a las proscripciones que son modalidades sutiles del fraude.

Sr. Gamond. — ¿Me permite el señor senador, con la venia de la Presidencia?

Sr. Presidente. — El señor senador no admite interrupciones. Continúa en el uso de la palabra.

Sr. Snopek. — Le permito...

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Snopek, que ha solicitado no ser interrumpido.

Sr. Snopek. — Voy a hacer sólo una remisión general al capítulo pertinente del *Manual de la Constitución*, de Joaquín V. González, en que este autor condena con términos severos el fraude electoral. Las doy por reproducidas y en homenaje a la brevedad formulo moción concreta en el sentido de que sea insertada en el Diario de Sesiones.

Sr. Presidente. — Así se hará.

Sr. Gamond. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Gamond.

Sr. Gamond. — ¡El razonamiento del señor senador es totalmente irreal y contradictorio, porque el desconocimiento de la Constitución Nacional también importa una aberración, y la aplicación errónea de la Constitución Nacional también importa una aberración! Aberración con respecto a la cual existe la posibilidad de que incurran todos los jueces, y que la ha habido en épocas no muy lejanas, que no quiero traer de nuevo a la memoria, porque tengo más caridad olvidando que los que quieren convertirse en víctimas de lo que no son.

No hay ningún motivo e importa un agravio para los que estamos luchando por la pacificación del país, el pedir la inserción en el Diario de Sesiones de capítulos de la obra de Joaquín V. González referentes al fraude. Este es un agravio gratuito que el señor senador por Jujué le infiere a esta Cámara. Nosotros hemos aceptado de buen grado toda la larga, la reiterada, la repetida exposición que el señor senador ha hecho sobre cada uno de los temas que abarca esta ley, hasta el cansancio. Pero lo que no podemos aceptar en silencio es el agravio que este último pedido del señor senador importa para la Cámara; agravio que significa una injusticia histórica para un Parlamento que está trabajando honradamente por devolverle al país el pleno goce de sus instituciones y de sus libertades. Nada más.

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Snopek.

Sr. Snopek. — Señor presidente: debo decir, ante todo y con toda serenidad, que al pedir la inserción no he querido agraviar a la Cámara...

Sr. Presidente. — Ya está dispuesta.

Sr. Snopek. — ...y precisamente para evitar que pueda interpretarse de este modo, solicito que se me autorice a retirar la moción que he formulado. Se trataba de una simple transcripción de carácter doctrinario.

En cambio, no puedo dejar de responder a la vehemencia del señor senador por Córdoba y lo hago con los siguientes y muy claros términos. No hemos querido echar culpas a nadie. Hemos querido contribuir a un elevado debate y a que quedara bien claro que lo que ha de sancionar el Congreso Argentino no sea un estatuto proscriptivo. Por eso hemos puesto particular nota, énfasis, y hasta hemos repetido hasta el cansancio nuestras dudas, nuestras incertidumbres, nuestras vacilaciones.

Los vericuetos de la ley son los más peligrosos, no sólo para la propia ley sino para todo el orden jurídico. Ese ha sido el sentido permanente de nuestra prédica en este recinto, y que quede bien en claro que nosotros no somos mal pensados ni mal intencionados, sino que creemos que este estatuto puede prestar base a la proscripción, y ese solo hecho basta para que se sientan inseguros no sólo nuestro partido sino todos los otros que están actuando en la vida política argentina. Ese ha sido el sentido claro de nuestra oposición, tanto en el informe escrito como a lo largo de este debate.

Es preciso que se lo diga con claridad y sin rodeos, que ésta no es una ley proscriptiva, sino que va a facilitar la reconstrucción política argentina; que se lo diga con claridad, repito. El país, en los momentos más difíciles, necesita de verdades claras y sencillas. Eso es lo que deseamos que se le exprese. Venimos de un proceso doloroso de proscripciones. Hay un considerable número de ciudadanos que no están representados en el Congreso Nacional. Ese solo hecho basta para que empleemos el máximo de cautela y de prudencia en esta ley; más aún: el país necesita precisión, necesita que se le fije un rumbo, que se le diga que ésta debe ser la ley del reencuentro de los argentinos.

Sr. Martínez Saravia. — ¿Me permite una interrupción el señor senador?

Sr. Presidente. — El señor senador ha manifestado que no desea conceder interrupciones.

Sr. Martínez Saravia. — Solicito que me conceda la palabra una vez que finalice la exposición del señor senador.

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Snopek.

Sr. Snopek. — El país necesita en definitiva que se deje consagrado que los argentinos van a tener la libertad de elegir y ser elegidos, no una mera libertad de optar...

Sr. Aguiar Vázquez. — Se lo han dicho veintec veces.

Sr. Snopek. — ...que van a tener una libertad política amplia, sin desmedro de la ley, vale decir, necesitan los argentinos manifestar que esta ley no contiene ninguna trapisonda, que no es una ley trampa. Eso es lo que quiere el país y hay que decirlo con toda claridad: que esta ley va a ser franca y leal para la República, va a realizar los preceptos de la unidad nacional que proclama el Preámbulo de la Cons-

titución. Necesitamos que se diga que esta ley va a estar inspirada en el sentimiento de patria, que es el que debe unir a todos los argentinos. Esto es lo que necesitamos que se nos diga, y ello hubiera evitado todo este larguísimo debate. Nada más.

Sr. Fassi. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fassi.

Sr. Fassi. — Señor presidente: el senador preopinante se agravia contra el inciso b) del artículo 88, y eso me llama profundamente la atención. Me parece una falta de generosidad del señor senador.

Hasta que se sancione el despacho que consideramos está en vigor el decreto ley 12.532 de 1962, y hay órganos partidarios que han obtenido su personería jurídica, y otros que están tramitándola. Esa tramitación puede estar avanzada, tal vez falte algún recaudo final para que se le conceda la personería. El inciso b) lo único que pretende es facilitar a esos partidos la opción entre obtener su personería utilizando el estatuto que estamos sancionando, o terminar el procedimiento que ya han puesto en marcha y que les permite llegar a la personería jurídica.

Los partidos que están en esa condición, es decir, pendientes de obtener la personería jurídica, no son los representados en este Senado ni en la Cámara de Diputados, sino los que comparten con el partido del señor senador un mismo pensamiento político, y me parece muy poco generoso que el señor senador, que forma parte de uno de esos partidos reconocidos, se oponga a que se establezca esta disposición que permite que otras fuerzas políticas muy similares a la del señor senador puedan llegar a tener la personería jurídica. Y esto es sorprendente, porque si todos queremos una ley generosa y amplia, si protestamos contra la reglamentación, cómo vamos a aceptar una disposición que pone en el camino de obtener una personería jurídica a quienes podrían ya haber andado en ese camino larga jornada.

Pero es más: yo diría que todo este artículo 88 está impregnado de una gran generosidad; son facilidades que se acuerdan a los efectos de que puedan entrar en el ordenamiento político como partidos preexistentes algunos que podrían ser objetados. Y eso es también lo que encara el inciso a) del artículo 88.

Debe haber, pues de lo contrario no se habría pedido la inclusión de este artículo en el ordenamiento de la ley, partidos que se han fusionado en la República, y se los quiere considerar como partidos preexistentes a los efectos del beneficio que de esa circunstancia puede derivarse, aun en el orden patrimonial, desde el punto de vista de la contribución del Estado.

Y entiéndase bien, señor presidente, que ésa no es la situación de nuestro partido, orgánico, regular, sin fusiones de ninguna índole, que si-

que siempre su camino sin buscar los votos de los demás partidos, conforme con su propio destino y con sus propios sufragios.

Lo que tenemos que aclarar bien con respecto a este artículo 88, y en nombre de la comisión, es su verdadero sentido, porque queremos que esta ley sea clara y no tramposa.

Todo partido que esté reconocido en el momento de la sanción de esta ley, que haya convenido la fusión antes de la sanción de la ley con otro partido que también esté reconocido, si esa fusión ha sido dispuesta por los órganos competentes, de acuerdo con sus respectivas cartas orgánicas, y si pueden probarla, tendrá el reconocimiento de partido preexistente a la ley.

En suma, señor presidente, la primera disposición es generosa en cuanto todo partido que pueda presentar una prueba veraz y auténtica de haberse fusionado antes de la ley, teniendo reconocida su personería, es considerado como partido preexistente. Y la segunda disposición establece que el que ya ha iniciado los trámites de su reconocimiento, si los termina exitosamente, también es considerado como partido preexistente. Claro está que éste no podrá fusionarse porque la fusión sólo puede hacerse entre los partidos reconocidos.

Esta explicación, señor presidente, sirve también para ponernos frente a otra evidencia que los que manejamos las leyes tenemos como una experiencia diaria: hay dos maneras de interpretar las leyes, en las que cada uno pone su íntimo sentir. Algunos interpretamos las leyes siempre con un sentido de buena fe; a veces se nos engaña en nuestra buena fe, pero vivimos en la idea y el pensamiento de que estamos compartiendo un mundo decente, donde nuestra decencia encuentra al frente la decencia ajena. Y con ese espíritu, que no está siempre prevenido, que olvida los agravios del pasado, que olvida las veces que se ha procedido contra nosotros injustamente y que pretende la construcción de un destino mejor, es que hemos considerado cada uno de estos artículos y estamos dando la interpretación del que tratamos.

Seamos generosos, señor presidente. No nos podemos dar la mano fraterna si cada uno de nosotros está dudando de la traición de quien le tiende la mano. Creo que estamos frente a tiempos futuros, donde los argentinos podamos construir en paz nuestro gran destino y no necesitamos estar repitiéndolo a cada momento; no hacemos un estatuto para proscribir a los que quieran constituir partidos democráticos, donde el afiliado tenga la soberanía y donde elija sus autoridades y candidatos, y se dé sus programas. Todos los partidos que actúen dentro de este principio y los que no se sometan a la prepotencia de un mandón, sino los que tengan como base al afiliado y encuentren en éste la fuente de su soberanía, tendrán en la República la oportunidad de actuar en paridad de circunstancias y de llegar al gobierno si las mayorías los acompañan. Pero el proceso tiene que ser limpio

desde su origen, y tiene que radicar en la soberanía del pueblo, en la voluntad del afiliado y en el programa que represente la coincidencia de cada uno de los hombres que integran el partido y no un mandato que le llega desde el cielo como una providencia divina. (Aplausos.)

Sr. Snopek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Snopek.

Sr. Snopek. — Ante todo, señor presidente, no puedo dejar en pie las afirmaciones iniciales del representante de la mayoría. No es exacto que me haya opuesto al artículo 88, inciso b), ni que haya regateado la generosidad de éste. Lo que he dicho en términos claros y bien precisos es que esa generosidad no está reflejada en la segunda parte del artículo anterior, en cuanto a los partidos políticos preexistentes que ya tienen otorgada su personería. He expresado con toda claridad que a los partidos que tienen personería se les obliga, de acuerdo con este estatuto, a cumplir de nuevo con todos y cada uno de los requisitos...

Sr. López. — El señor senador se está refiriendo al artículo 87...

Sr. Snopek. — Me estoy refiriendo al artículo 88.

Sr. Presidente. — El señor senador se está refiriendo al artículo 88.

Sr. López. — No, señor presidente, se está refiriendo al 87.

Sr. Presidente. — Se debe a un error, señor senador, porque se está refiriendo indudablemente al artículo 88.

Sr. López. — No, señor presidente.

Sr. Snopek. — Me estoy refiriendo al artículo 88, inciso b)...

Sr. López. — Afirmo que no, señor presidente.

Sr. Snopek. — ...para aclarar que no me oponía sino que, por el contrario...

Sr. López. — Y entonces, ¿todo lo que habló antes?

Sr. Snopek. — ...lo que quería poner de manifiesto es que el espíritu del artículo 88, inciso b) no está reflejado en la segunda parte del artículo 87, en cuanto dispone que los partidos que tienen ya personería otorgada y que incluso han actuado en los procesos electorales anteriores, y de los que emerge también nuestro mandato, tienen que cumplir de nuevo con una serie de requisitos. Vale decir, señor presidente, que de ninguna manera —y que quede bien en claro y sentado en lo que respecta a esta materia— hemos formulado observación alguna al artículo 88, inciso b). Precisamente, en torno a esto, dije que había que hablarle con claridad a la República, y me placen los términos que ha pronunciado el señor representante del bloque de la mayoría en el sentido de que debían ser lealmente interpretados. Es decir que este estatuto no contiene trampas ni trapicondas, sino que es un ordenamiento leal...

Sr. Martínez Saravia. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Presidente. — Está en el uso de la palabra el señor senador Snopek y la presidencia no concede interrupciones.

Sr. Snopek. — ...un ordenamiento leal y honesto. Precisamente, en este inciso b) del artículo 88 al que me vengo refiriendo, porque muchos ciudadanos justicialistas que participan de nuestras ideas están solicitando personería política y necesitan los esclarecimientos necesarios para obtener el instrumento de que han carecido y por el cual no han concurrido al proceso electoral; y yendo a la generosidad y a la lucha limpia y leal nosotros tenemos que dejar aclarado, señor presidente, que también queremos la lucha franca, no sólo interna sino externa con todos los sectores de opinión con que puede contar nuestro movimiento.

A eso iba la aclaración que formulé y por eso es que terminé mi exposición condenando las proscripciones y el fraude.

Necesitamos que se dé amplia libertad en la formación de los partidos políticos. Por eso es que nos place que se hayan hecho las aclaraciones; lo que nos duele es que se nos haya hecho aparecer como queriendo tratar de negar la personería u oponiéndole trabas a los partidos políticos que en este momento se encuentran tramitándola en virtud del estatuto anterior. De ninguna manera y bajo ningún concepto. Queremos que esos partidos la obtengan y entren en la lucha leal. Lo que sí queremos dejar establecido es que este estatuto no puede ser utilizado como instrumento para decretar proscripciones arbitrarias y que, acatándose sus disposiciones lealmente interpretadas, puedan todos los partidos existentes o en formación participar libremente en la vida política argentina.

A eso nos referíamos y no puede dar lugar a confusiones de ninguna naturaleza. Si alguna duda hubiera, me remito directamente a mis palabras que constan en la versión taquigráfica.

De ninguna manera he querido poner trabas o escollos a los partidos que están tramitando su personería política. Quiero dejarlo bien establecido, ya se trate de partidos de extracción justicialista o ajenos a ella.

Precisamente deseábamos dejar aclarado que los que no concurrieron a solicitar personería política son los que están al margen de la legalidad argentina; éstos son los que están en contra de la Constitución y conspirando contra la estabilidad constitucional argentina. A los que concurren al mandato de la ley deben facilitárseles todos los caminos y dárseles la libertad de elegir y ser elegidos, tal lo proclama como derecho humano la Declaración Universal de las Naciones Unidas.

Con ese alcance es que nuestro sector deja perfectamente fijada su posición en esta materia. Somos contrarios a todo tipo de proscrip-

ciones y a todo tipo de discriminaciones en la familia argentina.

Sr. Martínez Saravia. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Se va a votar, señores senadores.

Sr. Martínez Saravia. — Pido la palabra, señor presidente. Es un derecho.

Sr. Presidente. — El señor senador Snopek solicitó una interrupción para una aclaración en el momento en que se estaba votando el artículo.

Sr. Martínez Saravia. — Pido la palabra.

Sr. Bauducco. — Ya se había votado cuando el señor senador pidió la palabra.

Sr. Martínez Saravia. — No voy a hacer uso de la palabra, señor presidente.

Sr. Presidente. — Muchas gracias, señor senador.

Sr. Martínez Saravia. — Me sentía aludido y por eso solicité la palabra.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 88.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—Se enuncia y aprueba sin observación el artículo 89.

—Al enunciarse el artículo 90, dice el

Sr. Fernández. — Pido la palabra. Voy a ser breve. Interpreto que el artículo 90, al establecer «por esta única vez todos los trámites establecidos por la presente ley a los efectos del reconocimiento de los partidos políticos», se refiere específicamente a los trámites a cumplir para conseguir su reconocimiento por parte de partidos políticos nuevos, mientras que el artículo 87 se refiere a los partidos nacionales o confederaciones existentes y reconocidas a la fecha...

Sr. Fassi. — Así es, señor senador.

Sr. Fernández. — Muchas gracias.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 90.

Sr. Aguiar Vázquez. — Ya está votado.

Sr. Fernández. — Un segundo, por favor, voy a continuar con mi exposición.

Sr. Presidente. — Le ruego me disculpe.

Sr. Fernández. — Estimo —ya conocida la interpretación de estos dos artículos— que el plazo angustioso que se acuerda por el artículo 90, es decir, de hasta 50 días antes de la fecha de realización de los primeros comicios nacionales, es insuficiente en relación con el 14 de marzo, fecha fijada para los mismos, de acuerdo con el decreto de convocatoria. Efectivamente, 50 días antes nos retrotraen al 23 de enero como fecha máxima para el cumplimiento de los requisitos fijados por el artículo 90. En el mes de enero hay ocho feriados, quiere decir que habría un término de 15 días hábiles para el reconocimiento de nuevos partidos políticos. Lógicamente, para obtener el reconocimiento, y de acuerdo al artículo 74 y siguientes del proyecto que estamos considerando, es absolutamente impo-

sible que pueda aplicarse en la práctica esta disposición. Insisto en que, por lo angustioso del plazo, va a resultar imposible la aplicación del artículo 90, o sea que prácticamente no podrá producirse reconocimiento de partidos políticos nuevos.

Sr. Castiglione. — Se pueden habilitar días. Ha ocurrido muchas veces.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 90.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda aprobado el proyecto de ley. Pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.

2

MOCIONES

Sr. Salmén. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Salmén.

Sr. Salmén. — Después de esta larga y fatigosa jornada parlamentaria, solicito se pase a un breve cuarto intermedio de treinta minutos para que los distintos sectores de este cuerpo consideren el plan de labor que habrá de seguir la Cámara.

Sr. Blanco. — Pido la palabra.

Sin perjuicio de adherir a la moción formulada, propicio que antes se vote una autorización a la Presidencia para que pueda comunicar las sanciones que hayan recaído en distintos asuntos y las que se produzcan más adelante.

Sr. Salmén. — De acuerdo.

Sr. Presidente. — Se va a votar, en primer término, la proposición del señor senador Blanco autorizando a la Presidencia a formular las comunicaciones de las sanciones que adopte el cuerpo...

Sr. Blanco. — Y que haya adoptado.

Sr. Presidente. — Y que haya adoptado. Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — En consideración la moción formulada por el señor senador Salmén.

Sr. Bauducco. — Por razones obvias hago indicación de que se pase a cuarto intermedio por el término de 45 minutos.

Sr. Salmén. — Acepto.

Sr. Presidente. — Sería exactamente hasta las veintidós.

Se va a votar la moción de pasar a cuarto intermedio hasta la hora indicada.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Invito a la Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta la hora 22.

—Es la hora 21 y 15.

—Siendo la hora 23 y 35, dice el

Sr. Presidente. — Se reanuda la sesión. Por Secretaría se va dar cuenta de los asuntos entrados.

3

ASUNTO ENTRADO

I

Informe de los señores senadores Zinny y Demetrio Abdata sobre el III Congreso de Seguridad Social realizado en Bariloche

Buenos Aires, diciembre de 1964.

Señor presidente del Honorable Senado de la Nación, doctor Carlos H. Perette.

S/D.

Por decreto 436/64, emanado de esa Presidencia, se nos ha designado para concurrir, en representación del Honorable Senado, al III Congreso Nacional de Seguridad Social, organizado por el Consejo Federal de Seguridad Social, y que se llevó a cabo en Bariloche, Río Negro, desde el 6 hasta el 16 de diciembre de este año, por lo que cumplimos en informar al señor presidente acerca de nuestra concurrencia y de la realización y conclusiones de dicho congreso.

Comenzaremos señalando la corrección y cordialidad con que hemos sido atendidos por las autoridades del congreso, como así también la perfecta organización y planificación previa de las tareas, lo que ha hecho posible que se trabaje en forma intensa y provechosa, eludiéndose las dificultades que naturalmente presenta toda labor a desarrollarse por organismos colegiados cuando debe cumplirse en un término breve.

Han asistido 106 delegados, de más de 40 reparticiones públicas, entidades estatales descentralizadas e instituciones privadas vinculadas a los distintos problemas que interesan a la seguridad social, provenientes de la Capital Federal y de once provincias argentinas, e incluso algunos representantes de embajadas y universidades extranjeras. La distribución del trabajo se realizó por el sistema de formación de comisiones y las resoluciones y recomendaciones aprobadas significan, en nuestra opinión, un ponderable avance doctrinario en la materia que ha constituido el objeto del congreso.

Debe destacarse la aprobación de dos importantes resoluciones, por las que se encomienda la preparación de un anteproyecto de código de seguridad social y se fijan, respectivamente, los principios en base a los cuales se lo elaborará. Este anteproyecto será preparado con miras a su oportuna elevación a consideración del Honorable Congreso de la Nación, y, con ese objeto se crea una comisión especial, estableciéndose su composición y fijándose un término breve para el cumplimiento de su cometido. La presentación al Congreso Nacional se efectuará previa consulta al Poder Ejecutivo nacional, a los gobiernos de las provincias, a las universidades y a las asociaciones de trabajadores, de profesionales y de empresarios. El Consejo Federal de Seguridad Social deberá convocar al IV Congreso Nacional de Seguridad Social para que se realice en Buenos Aires a mediados de 1965, al solo efecto de considerar dicho anteproyecto.

Aparte de esas resoluciones, que han constituido el tema principal del congreso, se aprobaron varias re-